

Procesos y bloques políticos en la crisis chilena 1970-1973

MANUEL A. GARRETÓN y TOMÁS MOULIAN

“Tomar distancias para comprender no al combatiente sino la batalla... El sociólogo viaja en el equipaje de los militantes, pero luego rehusa ser un memorialista y busca un sentido que no podía estar presente en la conciencia de los actores”.
(A. TOURAINE, *La sociedad invisible*).

I. INTRODUCCIÓN

Este trabajo intenta específicamente una descripción y un análisis de los rasgos y procesos principales y de los actores políticos centrales de la lucha política en el período 1970-1973 en Chile.¹ No se trata pues de un intento de interpretación global del proceso ni tampoco de una discusión de las múltiples interpretaciones que existen al respecto.

Este período ha sido objeto de un sinnúmero de análisis e interpretaciones, dada su trascendencia y significado histórico político. Desde nuestra perspectiva, una interpretación global y una tesis definitiva al respecto es aún un largo camino por recorrer si no queremos enredarnos

¹ Este trabajo en su versión preliminar fue presentado junto a otro estudio de los mismos autores al Taller de Coyuntura de CLACSO, Lima, enero de 1977. El otro estudio, titulado “*Análisis coyuntural y Proceso Político Las fases del conflicto en Chile, 1970-1973*”, no ha sido incluido en la presente edición, debido a su extensión. Estos dos trabajos, independientes, pero de algún modo complementarios, forman parte de una investigación más amplia en que ambos autores participan, el Proyecto “*Ideología y Procesos Sociales en la Sociedad Chilena, 1970-1973*” y cuyos materiales de trabajo, elaborados por el equipo de investigación (Manuel A. Garretón, Leopoldo Benavides, Cristián Cox, Eugenia Hala, Eduardo Morales, Tomás Moulian y Diego Portales), han sido la base indispensable de este estudio. Tales materiales abarcan una Cronología del período, una Bibliografía, un Anexo Estadístico y dos extensos Informes, editados a mimeógrafo en junio de 1976 y abril de 1977. Esta investigación ha contado con Grants del Social Science Research Council, la Fundación Ford y el patrocinio de FLACSO. Obviamente, la responsabilidad es exclusiva de los autores. Se ha reducido en esta presentación la bibliografía al mínimo indispensable, considerando que ella ha sido incluida in extenso en los Informes citados.

en visiones y polémicas del pasado que están prisioneras en concepciones que existían antes incluso del desencadenamiento del proceso.² De ahí que el ejercicio indispensable de inmersión en la historia concreta del período sea previo a una tesis definitiva, si ella puede existir, y permita que los actores y procesos aparezcan en sus perfiles más precisos y sea así posible recuperar los significados más finos de su acción. Para quienes quieran extraer de un proceso como el vivido en Chile en 1970 y 1973 no la reafirmación acrítica de sus convicciones previas sino aquello que permite "entender" la historia y reformular sus propios proyectos ideológico políticos, insistimos que este ejercicio nos parece una condición necesaria, aun cuando no suficiente y aun cuando el intento concreto de estas páginas pueda adolecer de errores o insuficiencias.³

Es por ello que este ejercicio va acompañado de otro correlativo, cual es ubicarse en una perspectiva que intenta, aunque parcialmente, no asumir el punto de vista de un actor específico. Una vez realizados ambos, y una vez que se ha intentado comprender la racionalidad de los otros actores, no desde el punto de vista exclusivo de uno de ellos, es que puede volverse a asumir éste.

Pero no existen análisis "inocentes" de procesos sociopolíticos. Ello nos obliga a ciertas aclaraciones. Hablamos desde una perspectiva que intenta recuperar el significado de un proceso para el movimiento popular y repensar el proyecto ideológico político de la izquierda. Hablamos también ex post, es decir, desde el significado que tiene la derrota del movimiento popular y sabiendo el carácter que asume un nuevo proyecto de dominación. Esto permite ver el proceso, entonces, en forma distinta a como lo veíamos como actores inmersos en una lucha aún sin final, y permite recuperar significaciones que no estaban claras o que aparecían obnubiladas durante el proceso mismo.

Pese a que no hay "análisis inocentes" ya que todos ellos revelan o parten de un interés que los connota, y el nuestro ya está señalado, se requiere una nueva precisión.

Tratamos de no caer presos de las orientaciones y categorías mismas con que los actores conceptualizaron el proceso. Ello llevaría a una ratificación acrítica de lo que siempre se afirmó, a confirmar profecías y proclamar "lo que hubo o no de hacerse". Nos apartamos parcialmente, entonces, de ciertas orientaciones que ven en el caso chileno la ratifica-

² Pese a esto, los autores han adelantado algunas hipótesis tentativas de interpretación en los siguientes trabajos: Tomás Moulian, "*Lucha política y clases sociales en el período 1790-1973*" (FLACSO, Documento de Trabajo, 1976); Manuel A. Garretón, "*Una perspectiva para el análisis de los aspectos ideológico-políticos del período 1970-1973 en Chile*" (FLACSO, Documento de Trabajo, 1976) y "*Elementos para el análisis y la investigación del proceso político chileno 1970-1973*" (Revista Latinoamericana de Sociología, N° 2, 1975, pp. 119-145).

³ En todo caso, este intento debe verse en referencia a "*Análisis coyuntural y proceso político...*" (FLACSO, Documento de Trabajo, 1977).

ción de ciertas leyes generales, la particularización de una teoría, y que ven en el fracaso, entonces, desviaciones o modelos estratégicos errados, frente a los cuales se opone el modelo o la línea "correctos". En otras palabras, la crisis o frustración de un proceso social, es también la crisis de las categorías con que fue analizado.

La perspectiva elegida es analizar la lucha política del período como el paso de una crisis parcial de la sociedad a una crisis total, a través del desencadenamiento de la crisis del régimen político. Para ello, una vez explicitada esta perspectiva, recorreremos los hitos fundamentales de la lucha política, recapitulando posteriormente los procesos y la racionalidad de los bloques políticos.⁴

Desde ya queda claro el carácter del análisis, limitado al nivel político. Entre algunas otras limitaciones particulares, debemos señalar: a) que se deja de lado lo referente a la estructura económica propiamente tal y al desarrollo específico de la crisis económica, así como al contenido y significado concreto de las políticas específicas de Gobierno y, por lo tanto, al desarrollo de su programa; b) que se reduce el análisis de los actores sociales a sus expresiones puramente políticas y primordialmente partidarias; c) que no se concluye directamente el análisis de factores internacionales ni de los actores en que estos factores se expresan.⁵

II. CRISIS SOCIAL PARCIAL Y PROYECTO SOCIOPOLÍTICO DE LA UP

Si bien el objetivo de nuestro trabajo es preciso y limitado, es evidente que hay detrás de él un marco analítico más amplio, dentro del cual aparece más claramente inteligible. No es nuestro interés ni cabe aquí entrar en una larga exposición de ese marco, de modo que nos contien-

⁴ Desde ya debe matizarse el concepto "racionalidad" en el sentido que el comportamiento social en el período estuvo traspasado por elementos no siempre atribuibles a una determinada lógica, sino producto de un clima proclive a las acciones "no racionales".

⁵ Estos diversos elementos serán recuperados en la investigación en curso ya mencionada. Tales limitaciones se deben en parte a las preocupaciones específicas de los autores pero también a la naturaleza de este trabajo, dado que el carácter mismo de la crisis del período y del marco en que se desarrolla, privilegian necesariamente este nivel del análisis.

Respecto al análisis de los factores internacionales, la indiscutible intervención norteamericana en el proceso político del período —ya suficientemente probada— no será objeto de análisis particular en este trabajo. Ella constituye un marco general —que no puede dejarse de lado— de la lucha política a través de las estrategias del "bloqueo invisible" y la más explícita de la "desestabilización", dentro

taremos con formular, sin siquiera justificarlas, algunas proposiciones que expresan sintéticamente sus puntos más importantes.⁶

La sociedad chilena presenta en 1970 una crisis que caracterizaremos como de crisis parcial. Se trata de una crisis del tipo de desarrollo capitalista dependiente, incapaz de asegurar un crecimiento constante, auto-sostenido y de repartición equitativa de sus frutos, y de una crisis del Estado de compromiso, incapaz de asegurar una dirección política estatal estable que resolviera la crisis de desarrollo. Hablamos de crisis parcial, en la medida que no existía una crisis del régimen político democrático.

Hay en esta crisis, en lo que se refiere al problema de hegemonía, un triple aspecto que debe resaltarse.

En primer lugar, la debilidad política de las clases predominantes, que no pueden asegurar una conducción política directa y deben contentarse con una política defensiva⁷ sin crear hasta 1964 un "bloque defensivo" y ejerciendo su influencia política a través de los siguientes medios: a) utilización del poder parlamentario para "morigerar" los programas de los sucesivos gobiernos reformistas; b) participación minoritaria en esos gobiernos, siempre como sustitutos del bloque de centro izquierda des-

de las cuales hay momentos o hitos más precisos o dramáticos, pero no puede explicar por sí solo los procesos internos de lucha política a los que se refiere este trabajo. Véase al respecto, entre otros, "Covert action in Chile, 1963-1973". *Staff report of the Select Committee to study governmental operations with respect to the intelligence activities* (Washington, 1975), y Richard Fagen, "The United States and Chile: roots and branches" (Foreign Affairs, Enero, 1975).

⁶ Estas ideas han sido desarrolladas más largamente en los Informes citados y en un borrador titulado, "El desarrollo de la crisis parcial en Chile, 1938-1970". Desde un ángulo complementario, el trabajo de Leopoldo Benavides, "Antecedentes históricos del período 1970-1973. El proceso de democratización en Chile", en el Informe de Investigación, de abril de 1977, citado en nota 1.

⁷ Para entender esta problemática puede elaborarse una tipología de políticas defensivas. Esta se compone de dos clases principales: el bloqueo defensivo y el ajuste defensivo. El primer caso está compuesto por dos variedades. Una de ellas serían las situaciones de "trasvasije", donde las clases predominantes modifican su representación política anterior, trasladándose desde el partido "tradicional" al partido "moderno", en general moderado y policlasista. La otra variedad es aquella en que no hay cambio de representación; la Derecha entrega su apoyo a una alternativa centrista, para evitar el triunfo de la Izquierda, o de un reformismo radicalizado. Forma un bloque político con el centro, pero manteniendo ella la representación que históricamente había asumido. El otro tipo de políticas, la modalidad del ajuste defensivo, implica un grado mayor de restricción de alternativas.

Si se analiza con estas categorías la historia política del período 1938-1964, se verá que la Derecha nunca aplicó una política de bloque defensivo y que sólo el

agregado; c) influencia ideológica dentro del Partido Radical, que fue hasta 1958 la organización centrista hegemónica.

En segundo lugar, y conectado a lo anterior, a partir de la ruptura del Estado oligárquico, el auge del reformismo significa la pérdida de la dirección e iniciativa por parte de los representantes políticos de las clases predominantes en manos de los partidos centristas. El éxito de ese esquema y también su estabilidad reposaba sobre una condición estructural que lo hacía orgánico: el reformismo llevó adelante simultáneamente la industrialización y la democratización política y social, creando de ese modo un terreno propicio para el entendimiento entre la burguesía, la clase obrera sindicalizada o políticamente representada y los sectores de capas medias ligadas a la industrialización, al desarrollo del aparato estatal y a la urbanización.

La fuerza política promotora de la industrialización es el Centro, que representaba en lo fundamental capas medias urbanas. Este realiza un conjunto de transformaciones burguesas que creaban condiciones para el desarrollo capitalista más perfeccionado, pero ateniéndose a los límites marcados por la estructuración de las clases predominantes; esto es, sin modificar las relaciones sociales campesinas.

A causa del perfil relativamente igualitarista del centrismo, las posibilidades de un crecimiento sostenido entraban en conflicto muchas veces con sus requisitos de legitimación, pues debían responder electoralmente a una base amplia y diversificada.

Pese a que el funcionamiento de la participación política de masas y la movilización social activa provocaban restricciones en la aplicación de políticas cuyo objetivo fuera asegurar a cualquier costo el crecimiento económico, esa contradicción potencial entre lo político y lo económico permanece inactiva durante el período, en sus expresiones críticas al nivel político.

En la base de esto hay una compatibilidad general entre el esquema de democratización, con participación y movilización crecientes, y el modelo capitalista de desarrollo económico con industrialización sustitutiva.

En tercer lugar, esta situación se altera en 1964, donde el reformismo cambia de dirección política a manos de la Democracia Cristiana que intenta un proyecto de modernización capitalista. La paradoja que enfrentó el Gobierno de Frei fue que la modernización capitalista que

58 tuvo éxito en sus múltiples tentativas de alternativa de poder propia. Entonces, del 38 al 58, durante veinte años cruciales de la industrialización en base a la sustitución de importaciones, la Derecha debió conformarse con alternativas restringidas de poder político. A diferencia de las variedades del bloque, donde las clases predominantes se fusionan o constituyen una alianza en el Centro, las políticas de ajuste sólo pretenden adaptarse, influir o abrirse un hueco dentro de un bloque ya constituido, al margen de la Derecha.

favoreció desencadenó su propia decadencia. Por un lado, los movimientos de modernización del sector industrial que implicaron una favorable evolución tecnológica creciente, monopolización e internacionalización de la economía provocaron, pese a ello, un distanciamiento entre la DC y sectores de la burguesía industrial. Por otro lado, ese mismo distanciamiento se produce respecto a los sectores latifundistas debido a la reforma agraria del período. Ambos sectores entonces, se reagruparon políticamente en la Derecha, la que buscará un camino propio a partir de una crítica radical al sistema político que es visto como un obstáculo al desarrollo capitalista.⁸

Deslegitimación del capitalismo e incapacidad de la DC de representar políticamente todos los sectores dominantes constituyen los resultados importantes del período 64-70.

Pero crisis del capitalismo y su legitimidad y crisis del Estado de compromiso no significan necesariamente crisis de legitimidad del régimen político democrático. Cualesquiera fueran las causas de esa legitimidad del régimen político democrático,⁹ lo cierto es que ella existía y así ella mantenía a todas las crisis que hemos mencionado en estado latente hasta 1970 o, al menos, sin efectos pertinentes desestabilizadores al nivel político.

La estabilidad de la democracia en Chile desde 1938 a 1970 no reposa de un modo decisivo en su legitimidad valórica. Ella está también ligada al predominio político centrista. Al revés de lo que algunos creen, las razones de ese predominio no habría que buscarlas en la especificidad de su discurso ideológico, que no tenía, frente a la democracia vigente, las reservas ideológicas de la Izquierda —preocupada de denunciar el carácter burgués de la institucionalidad— ni de la Derecha, demasiado conservadora y estancada en la nostalgia de la Edad de Oro de la república semi centrista.

Las razones del predominio político centrista, casi constante desde 1938 hasta 1970, habría que buscarlas en la compatibilidad entre su carácter organizacional y las condiciones políticas que crearon en Chile el Estado de compromiso.

En el caso chileno ese Estado no sólo se caracterizaba por la capacidad de articular desde arriba algunos de los intereses variados de una base social diversificada. También se caracterizaba por el carácter democrático, con participación amplia, del régimen político.

Este tipo de legalidad democrática cumplía diversas funciones: a) Organizaba la participación de los grupos que podían acceder a la lucha

⁸ El Programa de la Nueva República de Alessandri es una expresión de ello. Para un análisis detallado de la configuración del proyecto político derechista, Augusto Varas, "*La dinámica política de la oposición durante el Gobierno de la Unidad Popular*" (Santiago, mimeo, 1976).

⁹ Ver a este respecto capítulo IV de este trabajo.

política, limitándolos o excluyéndolos en algunas etapas históricas, pero, en general, permitiéndoles una cuota de poder de presión cada vez más depurada; b) permitía institucionalizar el conflicto social en un doble sentido: lo sometía a un orden más o menos universalista en lo formal y lo politizaba cada vez que era necesario, haciéndolo objeto del juego aparentemente global de negociaciones; c) estaba diseñada para hacer indispensable la negociación, principio estructurador que se expresaba institucionalmente en una distribución contrabalanceada de atribuciones que parcelaba minuciosamente la capacidad de acción entre las diversas instancias del Estado. Por eso, y también por la vigencia de un sistema electoral proporcional, cuya función particular era generar el interés de los grupos por participar dentro del sistema pues cada uno podía en principio obtener una cuota de representación, se hacía muy difícil la constitución de mayorías claras de una sola fuerza, lo que multiplicaba las presiones al compromiso; d) determinaba el carácter gradual del proceso de cambios, a causa no sólo de la dificultad de los procedimientos de elaboración legal, sino sobre todo a causa de la complejidad del campo de fuerzas.¹⁰

Este tipo de sistema político, si bien orientado por la racionalidad de un sistema socioeconómico capitalista, expresaba adecuadamente la existencia de una estructura de clases bastante diversificada donde las capas medias tenían una gran importancia cuantitativa, también reflejaba la relativa diversidad de las representaciones políticas, una de cuyas manifestaciones era la autonomía organizacional de las capas medias.

Por otra parte, al ser la negociación el principio básico de un orden político con atribuciones contrabalanceadas y con un sistema electoral que buscaba la dispersión de la fuerza más que la constitución de mayorías autónomas, el funcionamiento estable y eficiente de ese sistema requería de una condición política, el equilibrio céntrico, lo que favorecía el rol político crucial las capas medias.

En este momento no nos interesa dilucidar si primero se produjeron los cambios de la estructura de clases, o si fueron las modificaciones del aparato institucional las que originaron, en primera instancia, esa significación política. Lo que constatamos es que tanto la diversificación de la estructura de clases como los principios constitutivos del sistema político crearon el espacio para que las capas medias y su expresión política, el centro, jugaran ese rol.

Desde el punto de vista de las fuerzas políticas, la estabilidad del sistema se basaba, entonces, en una gran medida, en el rol pendular jugado por el centro político hasta 1964, en que el Partido Radical es desplazado

¹⁰ Ver Francisco Cumplido, "*Proyectos legislativos e institucionalidad jurídica, 1964-1973*" (FLACSO, Documento de Trabajo, 1976), y "*Proyectos de cambio, multipartidismo y representación proporcional. Chile (1964-1973)*" (FLACSO, Documento de Trabajo, 1977).

por un nuevo centro, la Democracia Cristiana. Ese papel pendular permitió la estabilidad, aun cuando la Izquierda, que era una fuerza ideológicamente anti-sistema, fuera consolidando su importancia política y constituyera la unidad entre socialistas y comunistas.

El hecho que el Centro apareciera para la Izquierda como una fuerza en disponibilidad, con la cual era posible integrar alianzas, constituía uno de los factores de incorporación de ésta al sistema, porque la hacía viable como alternativa de poder. Por otra parte, el rol pendular del Centro hacía soportable para la Derecha la participación política de la Izquierda, incluso hacía tolerables las alianzas de ésta con el Centro, porque estaba comprobado que la naturaleza ideológica y política de este último le otorgaban a esas alianzas un carácter transitorio. De hecho, eso había sucedido tanto en 1938, como en 1942, como en 1946.

Sin embargo, la Democracia Cristiana modifica, al asumir el Gobierno, en 1964, los papeles tradicionales del centro político. Mientras el Partido Radical era, por lo menos desde 1938 hacia adelante, una organización pragmática, que no pretendía fundar un nuevo orden social; la Democracia Cristiana estaba imbuida del sentido de misión histórica, se sentía la portadora de una verdadera revolución. Sin desarrollar todavía los aspectos que se refieren al carácter de este actor político, debemos decir que esas convicciones generaron una profunda inadecuación de la Democracia Cristiana a las funciones de centro político.

Empujada por sus pretensiones mesiánicas al aislamiento político, después del fracaso de sus pretensiones de absorber la base de la Derecha, tratando de aprovechar su pánico a la Izquierda para movilizarla en una nueva dirección ideológica, y de absorber la base política de la Izquierda, mediante una política redistributiva y de reformas sociales, la Democracia Cristiana afrontó en 1967 el impasse de su proyecto de "revolución en libertad". Debido al desgaste electoral expresado en los resultados de los comicios municipales de ese año y los problemas surgidos en la política económica, a causa de un desfase entre los niveles previstos y los niveles reales de alza de las remuneraciones y de inversión privada, el Gobierno DC vio estrecharse aún más su margen de maniobra y negociación política. Impedido de buscar una base orgánica de compromiso con la Izquierda, por la dinámica electoral presidencial que ya se insinuaba y por sus compromisos cada vez mayores con el sistema capitalista, e imposibilitado de buscar la alianza con la Derecha, morigerando su política agraria, por no exacerbar sus contradicciones internas o por mantenerse como alternativa autónoma, el Gobierno DC opta por sacrificar los aspectos innovadores o reformistas de su programa.

De ese modo recorre la misma trayectoria de todos los Gobiernos que habían tenido un proyecto de cambio relativamente global o ambicioso: después de la euforia de los primeros años, el peso de la legalidad política, diseñada para asegurar el carácter negociado, gradual y parcial del

cambio, terminaba por hacerse sentir. El respeto de este juego institucionalizado producía evidentemente retardos y discontinuidades en los procesos de cambio, tanto en los referidos a los aspectos arcaicos de la sociedad chilena, como en los referidos no ya a una democratización de la estructura, sino incluso a la modernización capitalista.

Si se recorre la historia política chilena desde el siglo 19 sorprende la ausencia de revoluciones políticas transformadoras del orden social, quizás descartando la revolución que llevó al poder a Portales. Más allá del falso mito tejido en torno a él, es indiscutible que creó un Estado sometiendo y reduciendo a los caudillos militares, a los caciques regionales y a los jefes de familias propietarias a un orden político general. La mayoría de los intentos revolucionarios posteriores, incluyendo la revolución del 91, no buscaban transformar el orden social existente sino reducir la capacidad de acción presidencial. La acción autoritaria de Portales y después los arrestos autoritarios de Balmaceda provocaron una obsesión por el equilibrio de poderes. En 1925, aunque cambia la Constitución en un sentido más presidencialista, el principio del poder contralanceado se mantiene e incluso se perfecciona, porque al consolidarse desde 38 para adelante un esquema de tres fuerzas, la negociación y compromiso tienen el carácter de un requisito político.

Es evidente que lo que llamamos la obsesión del equilibrio de poderes no es ella una obsesión ideológica, una especie de fatalismo de Montesquieu. En realidad ella representaba la expresión institucional del tipo de consenso que intenta generar el sistema político. Una fórmula contralanceada tiene la capacidad de absorber dentro del sistema una cierta variedad de grupos, haciendo que ellos —aun aquellos que niegan ideológicamente la legitimidad— se sientan participando de una competencia política real, donde las minorías pueden tener algunos roles políticos significativos. En una sociedad fuertemente estatizada, y por ello superficialmente muy politizada, esta posibilidad de acceso a la participación política o al poder era considerada muy importante.

Este análisis sobre los principios de la legalidad política, donde rozamos la historia política del pasado, nos servirá más adelante para precisar el significado del proyecto sociopolítico de la UP, en el proceso de polarización política del período.

Volvamos ahora a la situación en 1970. La crisis del desarrollo capitalista dependiente y del Estado de compromiso en Chile parecía ofrecer sólo dos alternativas viables. Por un lado, la reversión de los procesos de democratización y el impulso a la dinámica de acumulación capitalista sin las interferencias de los elementos democráticos participacionistas o redistributivistas. De alguna manera, este era el intento de la alternativa de Derecha, que no puede imponerse en ese momento, debido a la legitimidad del régimen político, y es también el intento del régimen autoritario militar, a partir de septiembre de 1973, una vez culminada la crisis

de legitimidad. Por otro lado, la reversión del esquema de desarrollo capitalista, alterando los contenidos de clase del sistema de dominación, pero manteniendo vigente y desarrollando el proceso de democratización en su doble aspecto de tendencias igualitarias y régimen político. En esto consiste el proyecto sociopolítico de "democratización no capitalista", intentado por las fuerzas de Izquierda agrupadas en la Unidad Popular (UP)) y conceptualizado como transición al socialismo o "vía chilena al socialismo".¹¹ Él guarda, frente al sistema social, un doble aspecto de continuidad y ruptura. Continuidad respecto a un proceso de democratización reforzando tanto los aspectos redistributivos o igualitarios, como los relativos al régimen político democrático. Ruptura en relación al esquema de desarrollo capitalista dependiente. El contenido del proyecto social de la UP recogía sin duda las amplias aspiraciones desarrolladas durante largos decenios por el movimiento popular y otros sectores de la sociedad y aparecía como solución históricamente posible a la crisis social. Este carácter inversionista del proyecto —no siempre comprendido y expresado por las organizaciones políticas en el período— quedará definitivamente comprobado cuando el régimen que se instala a partir de septiembre de 1973, deba implantarse sobre la base de desarticular no sólo a la UP, sino a toda expresión o reivindicación orgánica o política de los sectores populares.

Es evidente también que este contenido mismo del proyecto político social de la UP entraba en contradicción con determinados intereses capitalistas y sus vinculaciones externas. Desde el inicio, esta contradicción existe y los hechos que preceden el ascenso de Allende al Gobierno así lo demuestran.¹² El carácter de la lucha política entre estos dos bloques está dado entonces por el enfrentamiento entre los intentos de realización del Programa, por parte del Gobierno, y los de su anulación o eliminación, por parte de la Derecha.¹³ Pero este contenido de la lucha

¹¹ Sobre el concepto de democratización no capitalista y sobre el carácter del Programa UP, ver "*Elementos para el análisis...*", art. cit. Sobre la *Vía Chilena al Socialismo*, ver M.A. Garretón y Felipe Agüero, el trabajo con ese nombre, en el Diccionario de Términos Latinoamericanos de Ciencias Sociales (CLACSO). Recordemos que los elementos centrales del Programa eran la expropiación de los grandes monopolios privados nacionales y extranjeros y su incorporación a un Área Social de la Economía que permitiera asegurar la reorientación de la economía hacia los intereses de las grandes masas populares y un conjunto de medidas destinadas a elevar el nivel de vida y de participación social y política de éstas. A este respecto, Diego Portales, "*La evolución programática de la Unidad Popular*" (en Informe de Investigación, *op. cit.*, abril, 1977).

¹² Recuérdese el asesinato del general Schneider, Comandante en Jefe del Ejército. Véase sobre estos aspectos: "*El caso Schneider*" (Documentos Especiales Quimantú, Santiago, 1972) y "*Documentos Secretos de la ITT*" (Ed. Quimantú, Santiago, 1972).

¹³ Es evidente la insuficiencia analítica del término genérico "Derecha". Dado, sin embargo, el grado de institucionalización política chilena, sus perfiles son más

política no explica, sin más, el proceso de polarización política y el consiguiente desencadenamiento de la crisis del régimen político. La eliminación o anulación del Gobierno, para imponer un proyecto alternativo al planteado por los sectores populares, choca inicialmente con la legitimidad del régimen democrático y con la racionalidad de negociación o neutralización del bloque del centro, sin el cual ninguna estrategia de derrocamiento podía prevalecer. Y es en torno a esta problemática que se planteará la lucha política del período.

III. LOS HITOS FUNDAMENTALES DE LA LUCHA POLÍTICA

Hemos dicho que el “escenario” de la lucha política se constituye con la inserción de un proyecto de democratización no capitalista, en respuesta a una crisis parcial de la sociedad, dirigido por los partidos populares y semantizado y vivido como socialismo. En la medida que se atacan directamente los intereses predominantes de los sectores capitalistas, éste es el núcleo de la lucha política. Pero hemos señalado que ella se da inicialmente en el marco de la legalidad democrática y en condiciones de división inicial de lo que constituirá el bloque opositor. Para prevalecer por sobre la estrategia de neutralización o negociación intentada por el centro político —la Democracia Cristiana—, la estrategia de derrocamiento deberá reconstituir la unidad política del bloque opositor y, asimismo, hacerse hegemónica en los sectores medios, rompiendo su lealtad con el sistema político con el que se identificaban y plegando de esta manera a la Democracia Cristiana.

Esta hipótesis general nos permite distinguir tres grandes etapas de la lucha política en el período.

La primera, abarca la conyuntura que va desde la elección de Allende, en septiembre de 1970, a noviembre de ese mismo año, en que fracasa, por prematura, la estrategia de derrocamiento, en este caso expresada como intento por impedir el ascenso de la Unidad Popular al Gobierno.

La segunda, abarca desde noviembre de 1970 hasta octubre de 1972, y está definida por el relativo predominio de la estrategia de neutralización por sobre la de derrocamiento.

La tercera etapa va desde octubre de 1972 hasta septiembre de 1973 y se define por el despliegue de la estrategia de derrocamiento.

o menos nítidos. Sobre la interrelación entre “derecha política” y “derecha económica” en el período, véase Varas, *op. cit.*

A lo largo de estas tres etapas, la crisis parcial a que nos hemos referido alcanzará también la legitimidad del régimen político, permitiendo su quiebre y la instauración del régimen autoritario militar.¹⁴

La corta etapa que va desde el triunfo electoral de Salvador Allende, en septiembre de 1970, hasta su asunción a la Presidencia de la República, el 4 de noviembre de ese año,¹⁵ gira en torno al problema de su advenimiento al Gobierno.

Tempranamente, los sectores de Derecha, representados políticamente por el movimiento alessandrista, buscan una alternativa legal que impida la consagración de Allende como Presidente, para lo cual necesitan el concurso de la Democracia Cristiana en el Congreso. Esta opta por un camino de negociación con la Unidad Popular, que se expresa en el "Estatuto de Garantías", consagrado a nivel constitucional. Desde la Derecha surgen orgánicamente expresiones extremas que critican el empantanamiento legal de los partidos de derecha y centro¹⁶ y cuya acción culmina con el asesinato del general Schneider. En un clima conmocionado y del que no están ausentes los intentos de generar una crisis económica, la Unidad Popular insiste en la tradición legal del país y en el carácter de su programa como garantía de estabilidad democrática.

Hay, tras estos hechos que culminan con el ascenso de Allende al Gobierno, algunos elementos que jugarán más adelante un papel decisivo y que aparecen aquí en su primera versión: el aislamiento político de la Derecha; la renuncia, por parte de la DC, a una solución a corto plazo que atente contra su identidad organizacional y política y el comportamiento de las Fuerzas Armadas.

Es posible interpretar estos tres fenómenos con una hipótesis sobre la existencia de una doble legitimidad que opera en los actores políticos como selector de las alternativas de su acción: adhesión instrumental e ideológica a la democracia, como principio de organización y generalización de la convicción que la sociedad chilena necesitaba cambios profundos.

¹⁴ El análisis detallado de estas etapas globales y de sus subfases o coyunturas, puede verse en nuestro trabajo "*Análisis coyuntural y proceso político...*", *op. cit.*, del que hemos extraído la síntesis de este capítulo. Nos hemos limitado en éste a una mera crónica esquemática o descripción secuencial de los grandes ejes, debiendo dejar de lado muchos acontecimientos cuyo tratamiento excedería el objeto de este trabajo, y posponiendo los elementos interpretativos para los capítulos siguientes.

¹⁵ Para esta etapa, también, el trabajo de Eduardo Morales, "*La coyuntura política septiembre-noviembre, 1970*", en el Informe de Investigación, *op. cit.*, abril, 1977. Recordemos que los resultados de las elecciones presidenciales fueron: Allende, 36.3%; Alessandri, 34.9% y Tomic, 27.8%.

¹⁶ El 10 de septiembre se crea el Movimiento Nacionalista Patria y Libertad, dirigido por el abogado Pablo Rodríguez, de importante desempeño en actividades terroristas durante el período y vinculado al levantamiento militar del 29 de junio de 1973.

Los sectores de derecha saben que su alternativa necesitaba el apoyo de la DC. Esta sacrifica un interés de corto plazo que la habría llevado a participar en un Gobierno crecientemente represivo frente a la movilización de los sectores populares desplazados y cuya dinámica no habría podido controlar —alternativa que desde un inicio habría afectado su unidad interna—, por una que consiste en hegemonizar una naciente oposición. Así, asume tanto la legitimidad del régimen político como la aceptación generalizada de los cambios necesarios. Al mismo tiempo, al centrar su acción en la aprobación del Estatuto de Garantías, aparece capitalizando el liderazgo político de los sectores medios que no habían apoyado a Allende, y perfilando el carácter institucionalista de su oposición.

La Derecha no puede, así, en esta primera etapa, asumir el rechazo a las soluciones legales. Su aislamiento le provoca el desborde por parte de grupo extremos y la ubica necesariamente como fuerza de oposición, subordinada a la DC. La búsqueda de otra solución estaba de algún modo impedida, porque el comportamiento de las FFAA estaba acotado por la legitimidad señalada. La intervención de éstas, marginadas por un largo período de la acción política por lo tanto, incapacitadas de madurar un proyecto político de consenso que no fuera la sumisión a los mecanismos operantes de sociedad política, exigía condiciones de crisis social que no se daban en 1970, más aun cuando aparecen posibilidades de soluciones negociadas de consenso en la élite política.

II

La etapa que va desde el ascenso de Allende al Gobierno hasta la crisis de octubre de 1972, muestra que no es posible el análisis del período concibiéndolo sólo como una espiral de agudización de conflictos, sino más bien como un proceso complejo en que se combinan coyunturas frías y calientes, momentos de lucha aguda con fases de interludio.

Así, entre el ascenso de Allende y el asesinato del ex Ministro Frei, Edmundo Pérez, en junio de 1971, la escena política gira en torno a las elecciones municipales de abril de 1971 y sus consecuencias —con lo que se favorece un clima de violencia verbal en Gobierno y Oposición, principalmente la DC— y el despliegue de la estrategia de transformaciones económicas del Gobierno.

En esta fase, la agitación agraria en las provincias del Sur —expresada en ocupaciones de fundos y en enfrentamientos entre campesinos y patrones— ejerce una triple presión al Gobierno entre diciembre de

1970 y marzo de 1971. Por un lado, los gremios patronales, desvinculados parcialmente de sus representantes políticos tradicionales, aún no sobrepuestos de su fracaso en impedir el ascenso de Allende, despliegan una estrategia corporativa buscando un "espacio" para la agricultura privada en un sistema con predominio del sector socializado. Por otro lado, la DC guiada —en un clima electoral— por su interés político de convertirse en la alternativa única de oposición, para lo cual necesita acotar la acción del Gobierno mostrando su capacidad exclusiva de negociación, plantea la tesis de la legalidad sobrepasada. Finalmente, las ocupaciones de tierra muestran al Gobierno los fermentos de movilización disponibles y las demandas por acelerar el ritmo de la Reforma Agraria. Frente a estas presiones, el Gobierno transforma las tomas en un medio de aceleración de la Reforma Agraria y busca la persuasión frente a los campesinos. Así, su respuesta es la masificación de la Reforma Agraria y la definición de las reglas del juego, asignando un rol mínimo y precario a los agricultores privados.

Para la realización de las transformaciones económicas anunciadas en el Programa, que contemplaban la expropiación de las grandes empresas monopólicas, el Gobierno elige el camino de utilizar cláusulas legales que le dan un insospechado poder y que le evitan el recurso permanente a la negociación. En un primer momento, tanto los sectores amenazados en sus intereses económicos, como sus aparatos de expresión política e ideológica, son capaces de elaborar una respuesta a esta estrategia. Pero, cuando de la expropiación de algunas empresas industriales se pasa al mecanismo de comprar acciones bancarias por parte del Gobierno para nacionalizar los bancos, revelando así una estrategia global, la DC buscará una movilización general contra esos intentos. A estas alturas, sin embargo, el intento de generalizar el conflicto político entra en contradicción con las tácticas adaptativas de los sectores económicos afectados que, temerosos de un endurecimiento, venden sus acciones.

El enfrentamiento de éstos y otros problemas iniciales, entre los que se cuentan las primeras confrontaciones entre el Gobierno y el Poder Judicial,¹⁷ el comienzo del proceso de nacionalización del cobre y el surgimiento prematuro del tema de la sedición, se hace en un marco electoral caracterizado por la dureza de las relaciones entre la UP y la DC y la relativa apatía política de la Derecha. La UP enfrenta el desafío en las elecciones de ampliar su base inicial de sustentación y para ello no tiene otra alternativa que mostrarse dispuesta a cumplir sin transac-

¹⁷ Ellas se originan en el Proyecto presentado por el Gobierno sobre Tribunales Vecinales, en el rechazo de la Corte Suprema a la inhabilitación de un senador derechista que la Fiscalía Militar suponía implicado en el asesinato del general Schneider y en el discurso político del presidente de la Corte Suprema en la inauguración del Año Judicial.

ciones el Programa ofrecido, so riesgo de frustrar a su propia base popular y perder la oportunidad de atraer a otros. La DC, en la que existen internamente versiones diferentes respecto a la UP, busca conquistar el liderazgo opositor. Tanto para mantener una línea de oposición como para articular una posible alianza con la izquierda, necesita mantener intacto su poder electoral. El Gobierno y la UP buscan en esta fase ampliar su autonomía. La DC presiona por neutralizarlos.

El resultado de las elecciones municipales de abril de 1971, en las que hay un importante crecimiento de la UP respecto de su base de apoyo, alcanzando alrededor del 50% de los votos —crecimiento capitalizado por el Partido Socialista—, un profundo debilitamiento del Partido Radical y una estabilidad política de la Derecha y la DC, genera procesos de reajuste parcial en el Partido Radical y un intenso debate en la DC, que abandona el tema de la ilegalidad de las acciones de Gobierno y reafirma ciertas temáticas revolucionarias. Para la DC se trata ahora de llevar a la UP al juego político tradicional, que regule las aspiraciones reformistas.

Sin embargo, la UP mantiene su estrategia de transformación económica. La expropiación de monopolios en el sector textil, acompañada de una movilización obrera, es un indicador de ello. Esto se realiza ante un bloque opositor desarticulado por un esquema político tripartito. Este mismo esquema impide por ahora que las tendencias desinstitucionalizadoras —enfrentamiento ahora ocasional en el campo o surgimiento de brotes de guerrilla rural, perseguida por el Gobierno— lleguen al desborde.

Para la Derecha, las elecciones hacen evidente la necesidad de romper el esquema tripartito, empujando hacia la polarización, lo cual puede facilitarse ahora por el agotamiento de la estrategia corporativa y adaptativa de los grupos económicos afectados por la política de transformaciones económicas del Gobierno. El Partido Nacional lanza entonces la consigna de un "Frente de Ideas" con la DC y, mientras ésta tantea las posibilidades de compromiso, la Derecha busca constituir nuevas temáticas políticas que generen iniciativas opositoras que desborden la acción de la DC. Así, hacia el final de esta fase que termina con el asesinato de Edmundo Pérez, se quiebra parcialmente el esquema tripartito, al vencer la Oposición unificada en las elecciones unipersonales de la Universidad de Chile.

Sin embargo, hasta este momento la UP actúa en medio de una oposición desarticulada, sin que operen en contra del Gobierno las imágenes que posteriormente generarán la lucha política agudizada y el desarrollo de la crisis de funcionamiento de la sociedad. Su acción transformadora representa aún un fuerte atractivo para aquellos sectores de la DC más sensibles a lo popular.

III

Es en este contexto que ocurre el asesinato de Edmundo Pérez, ex Ministro del Gobierno de Frei y representante de los sectores "duros" del "freísmo", a manos de un pequeño grupo de ultraizquierda, VOP, no vinculado a la UP, permeable a las infiltraciones y sin consistencia ideológico política.

Este hecho reflota la temática de la incapacidad del Gobierno para encauzar el orden público, favorece un clima emocional para el acercamiento entre la DC y la Derecha y deja al Gobierno y a la UP por primera vez a la defensiva desde el punto de vista político.

Como resultado de este clima, la Oposición se unifica en torno a un candidato DC en las elecciones complementarias de Valparaíso, en julio de 1971. Para la UP, el bloque opositor aparece como consolidado, sin percatarse de que la complejidad del cuadro político llevará a la DC a nuevas políticas pendulares.

Es en esta época que se producen importantes reajustes en el cuadro político. Por un lado, la situación de desconcierto en que quedan el Gobierno y la UP, tienen como correlato los primeros perfiles de discrepancias internas que aparecen a propósito de un documento de la Comisión Nacional Agraria del Partido Socialista, que rechaza la posibilidad de un tránsito institucional al socialismo, el que da origen a una rectificación de la Dirección de ese Partido, que plantea como respuesta la tesis de un plebiscito para abrir institucionalmente espacio a las reformas políticas.

Por otro lado, el debate interno de la DC da origen a la escisión de un sector que, junto con algunos dirigentes del MAPU, partido de la Unidad Popular, constituyen un nuevo Partido, la Izquierda Cristiana, que pretende ser un "cauce revolucionario para los cristianos". Por último, en el seno del Partido Radical, estallan las diferencias entre aquellos sectores que buscaban definir al Partido como una organización socialdemócrata y aquellos cuyo interés central era la incorporación plena a la UP, aun pagado el precio ideológico de la marxistización. El resultado de ello es la creación del Partido de Izquierda Radical, PIR, como fuerza socialdemócrata que reivindica para sí un rol crítico dentro de la UP y cuya lealtad con el bloque de Gobierno dependía de que éste modificara su estrategia de transformación económica.

Esta expansión relativa y condicionada de la UP mostrará sus debilidades más adelante, con la incapacidad de la Izquierda Cristiana de seguir absorbiendo base popular de la DC y con el realineamiento del PIR junto a la DC.

Junto a este reajuste del campo político en el que la DC, después de triunfar en las elecciones de Valparaíso, niega un pacto con la Derecha,

el Gobierno intensifica la lucha por constituir el Area Propiedad Social, tanto en el plano institucional, donde se producen los primeros enfrentamientos con la Contraloría que se niega a acoger los decretos de expropiación, como en el plano social, con la movilización obrera en torno a las expropiaciones. Sin embargo, aquí aparece en forma precaria una nueva estrategia opositora: oponer a la movilización de los obreros, la movilización de los empleados de los estratos medios de las empresas.

Hacia fines de julio de 1971, surgen por primera vez alusiones en los diarios a un problema que será central en el desarrollo de la crisis política: el desabastecimiento. La UP responde inicialmente con una estrategia de movilización de masas, creando las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), organismos de base que pretenden canalizar la defensa del abastecimiento popular.

Como consecuencia de la escisión de sectores izquierdistas de la DC y del reflujo consiguiente de ésta, el Partido Nacional (PN), intentará una contraofensiva opositora sobre la base de un fuerte apoyo gremial que obligue a los sectores centristas de la DC a plegarse a ella. Para los sectores económicos expresados en el PN, el ritmo de la crisis era demasiado lento y amenazaba con socavar todas sus bases de poder económico. Enfrentado el Gobierno a este problema, se vuelve a plantear el problema de la sedición. La DC opta por un camino alternativo, presentando un proyecto legal que regule y controle la estrategia de expropiaciones, inaugurando así el gran conflicto institucional del período.

La contraofensiva opositora adquiere por primera vez caracteres de movilización de masas, con dos hechos: por un lado, la toma de locales de la Universidad de Chile, en noviembre de 1971. La importancia de este conflicto radica en que revela tanto el grado de expansión de los conflictos políticos que involucran a personas e instituciones hasta entonces al margen de ellos, como un cambio en el estilo de acción de la Oposición. Por otro lado, la movilización en torno a la defensa de la compra de uno de los más importantes monopolios, la Compañía de Papeles y Cartones, agitando para ello el tema de la libertad de prensa.

Los hitos culminantes de esta ofensiva son la marcha callejera, en diciembre de 1971, llamada de "las ollas vacías",¹⁸ seguida de incidentes prolongados artificialmente, y el pacto electoral del PN y la DC para elecciones complementarias, en enero de 1972, en que esta vez la DC se ve obligada en una de ellas, a apoyar al candidato derechista. En estas dos elecciones el triunfo es de la Oposición.

La DC, calculando el costo político del desborde de una oposición que no podría controlar, busca intensificar el conflicto institucional para lo cual, junto con impulsar la acusación constitucional a un Ministro y

¹⁸ Tanto el diseño como las operaciones de esta movilización, muestran el papel de la CIA en ella.

negociar la solución al conflicto de la Universidad de Chile, donde autoridades impersonales y organismos colegiados se afiliaban a bloques políticos distintos, hace aprobar en primera instancia en el Congreso su proyecto de ley de las áreas de la economía.

Hacia febrero de 1972, es apreciable ya la incorporación plena de la DC en la oposición, ante una creciente radicalización de su base social, producto de la estrategia de la UP y de los brotes de desabastecimiento. En esta Oposición, la Derecha parece haber recuperado su capacidad de liderazgo o, al menos, avanzar en ese sentido. Ello le permite plantear públicamente, a partir de la acción en el Congreso del proyecto de ley de las áreas de la economía la tesis de la desobediencia civil al Gobierno, que circula en el mes de abril de 1972, expresión pública embrionaria de la alternativa de derrocamiento del Gobierno.

Por su lado, la UP no tiene otra alternativa que la constitución de su política de expropiaciones anunciadas y de constitución de Area de Propiedad Social, tanto por la necesidad de acelerar la construcción de un orden económico que permita hacer frente a la crisis que se avecina, como para afrontar desde posiciones de mayor fuerza una negociación posible y tal vez necesaria. En esta época, las divergencias internas en la UP aparecen como el reflejo de la pérdida de iniciativa del Gobierno. La primera reunión autocrítica, en enero de 1972, las revela muy parcialmente y ellas aparecen más claramente en el curso de las campañas electorales de esta época.

A partir de marzo de 1972 y hasta junio de ese año, se inicia un período de conversaciones entre la UP y la DC, para resolver el conflicto institucional relativo al proyecto de las tres áreas de la economía presentado por la Democracia Cristiana y aprobado por el Congreso, pero sujeto a los vetos presidenciales. Para la UP, su definitiva aprobación implicaba un bloqueo a la acción gubernativa. Para la DC, la ausencia de una mecánica legal clara para resolver el problema jurídico, podía encajonarla y favorecer a los sectores que buscaban un enfrentamiento. Dirigida entonces por sus sectores centristas, intenta encontrar una fórmula acorde a su táctica de cercar legalmente al Gobierno. En abril, la DC obtiene un primer resultado favorable en estas conversaciones al provocarse el retiro del PIR del Gobierno, por el rechazo de la mayoría de la UP a los acuerdos logrados por un representante de este Partido, a nombre del Gobierno, con la DC.

Más allá de los detalles concretos de la negociación, en la que la DC insistía en el carácter de matriz que debía tener el proyecto aprobado en el Congreso, ambos bloques estaban acotados en sus posibilidades de transacción y el clima en que ellas se desarrollan no favorecen la posibilidad de acuerdos.

La DC se ve permanentemente acosada por las ofensivas de la Derecha, que ve en estas conversaciones la continuación de la política seguida

entre septiembre y noviembre de 1970 y que plantea en esta época los temas de desobediencia civil e intentos de mezclar a las FFAA en el debate político. Las bases de apoyo de la DC sufrían un creciente proceso de radicalización.

La UP ve amagada su unidad interna a través de estas conversaciones, debido a la oposición a ellas principalmente del Partido Socialista. Ello, unido a la presión de su base social que ve la incorporación de las empresas al sector estatizado como un momento de su liberación, la lleva a intensificar en este período el proceso de ampliación del área de propiedad social.

Esta ofensiva de la UP se desarrolla también en un momento en que la crisis económica ha estallado: los sectores medios enfrentan problemas de abastecimiento, los organismos empresariales vaticinan una inflación galopante y el presidente reconoce algunos elementos de crisis, anunciando medidas de superación. Es en este clima de deterioro que la UP debe hacer coincidir su unidad interna con la necesidad de satisfacer prioritariamente las demandas de la base popular y la necesidad de llegar a compromisos con la DC. Todos estos factores, unidos a hechos de violencia no controlados, como el de Melipilla, con ocasión del desalojo de la ocupación de un fundo, y el de Concepción, en que las fuerzas de la UP (menos el PC, el PR y la Oposición) se enfrentaron directamente, determinan el fracaso de las negociaciones, en junio de 1972.

En esta fase, la segunda reunión autocrítica de la UP, en Lo Curro, marca un viraje en la política económica, cuyos efectos aparecerán más adelante, y hace manifiestas las discrepancias internas en el dilema "avanzar o consolidar". Las elecciones nacionales en la Central Unica de Trabajadores (CUT), por su parte, corroboran la fuerza política de la izquierda en la masa trabajadora, pero también la importancia relativa de la votación de la DC, que le permite reafirmar frente al Gobierno y la Derecha su carácter popular.

Los ejes principales de la lucha política desde el fracaso de las negociaciones entre la UP y la DC —que lleva al Senado a rechazar los vetos presidenciales, planteando en un nuevo nivel el conflicto institucional— hasta el desencadenamiento de la crisis de octubre de 1972, son: la evolución de las discrepancias en el seno de los dos bloques, la agitación gremial que prepara el movimiento de octubre y el desarrollo de la violencia política.

Si bien en julio de 1972 se consolida formalmente el bloque de Oposición a través del frente electoral denominado Confederación Democrática, subsisten problemas de fondo en esta alianza política, en la que la Derecha no consigue llevar a la DC a una línea de enfrentamiento directo. El desborde a través de la agitación gremial buscará resolver esta dualidad.

En el bloque de la UP su recuperación política con los triunfos de las elecciones complementarias de diputados en Coquimbo y en las de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), en julio de 1972, es realmente neutralizada con el agravamiento de sus discrepancias internas. El elemento culminante es la Asamblea del Pueblo en Concepción, donde todas las fuerzas provinciales de la UP, excepto el PC, y con el MIR, critican la conducción política del proceso y se propone la disolución del Congreso y su reemplazo por una Asamblea del Pueblo. La importancia de este hecho estriba en que combina proposiciones de reforma política con una metodología de construcción de un nuevo poder, lo que tendrá muchas repercusiones posteriores en el debate ideológico de la UP. Lo que está en germen es una estrategia de construcción socialista que permita desarrollar progresivamente la dualidad de poderes.

El intento de constituir un bloque de dirección alternativo en la UP, por parte de sectores que la veían hegemónizada por la conducción de Allende y el PC —significado profundo de la Asamblea de Concepción— tiene otro hito importante en la tematización en el mismo sentido del enfrentamiento entre policía civil y pobladores en el Campamento Los Hermita en agosto de 1972.

Tanto Allende como el PC rechazaron estos planteamientos. Pero a nivel del Partido Socialista ello es retomado en un Informe al Pleno, donde se pretende legitimar la búsqueda de nuevos caminos estratégicos ante la crisis que se vivía.

El llamado de Allende a buscar resolver los problemas concretos sobre la base de la unidad de dirección y la disciplina interna, es respondido heterogéneamente por los Partidos de la UP.

Estas divergencias se dan en un clima de exacerbación crítica, resultado de los problemas políticos que se enfrentaban, a los que se sumaban ahora nuevas dificultades económicas, producto de la política implementada como consecuencia de los acuerdos de Lo Curro. Esta nueva política económica, conocida como "Plan Millas", implicaba el reconocimiento de la crisis económica y un intento de rectificación de la política anterior, dirigida por el ministro Vuskovic. Ella significaba un intento de estabilización económica, con las consecuencias sociales inevitables, pero también con un profundo impacto político ideológico en el seno de la UP.

El segundo eje, de gran importancia en los movimientos del futuro, es la agitación gremial que se desencadena entre los comerciantes a raíz de la muerte accidental de un propietario de comercio en el Sur, con ocasión de un control rutinario por parte de funcionarios fiscales. El hecho de que un pretexto como éste desencadene un paro nacional del comercio y que estos sectores de muy poco peso político hasta entonces adquirieran significación en esta coyuntura, revela la existencia de un alto potencial de movilización y nivel de organización capaz de coordinar y

unificar sectores heterogéneos y dispersos. Hacia fines de septiembre, por razones tan arbitrarias como ésta, se constituyen en el Sur Comandos Gremiales a nivel provincial, que decretan paros. Estos movimientos parciales van creando el clima para un movimiento de mayor duración y permiten ensayar formas de organización. Es el preámbulo de la crisis de octubre de 1972.

Estos acontecimientos se dan en el marco de un creciente clima de violencia, con pequeños enfrentamientos provocados por grupos opositores en diversos sectores del país y donde la polarización ideológica debilita los mecanismos para soluciones negociadas. No es extraño entonces que durante el mes de septiembre se anuncie la existencia de un plan para derrocar al Gobierno y que el llamado a retiro de un general de Ejército, revele la conexión entre los intentos civiles de buscar el derrocamiento de Allende y algunos grupos militares aún muy incipientes. El mes de septiembre —en que por razones de la fiesta nacional las Fuerzas Armadas aparecen muy visibles— es un mes de expectativa de sondeo respecto a las opiniones militares.

IV

La crisis de octubre de 1972, que marca un punto crucial en el desarrollo de la lucha política del período, se inicia con un conjunto de pronunciamientos y paros por parte de gremios como los transportistas, los comerciantes y los estudiantes secundarios. El carácter de sus reivindicaciones es de tipo corporativo y parcial. Incluso su elemento unificador, la defensa contra la expropiación de la Papelera, revela este carácter parcial. Posteriormente, el movimiento desborda el ámbito regional y se hace nacional, produciéndose, por parte de los huelguistas, diversos actos de violencia. En un tercer momento, se produce la generalización del conflicto con la entrada de nuevos gremios al paro, entre ellos, los médicos, y su definitiva politización explícita con la elaboración de un manifiesto colectivo de reivindicaciones, llamado "El Pliego de Chile". Este no constituye una base de negociación sino un recurso para declarar la ilegalidad e ilegitimidad del Gobierno y para sujetar a los gremios desgastados por la huelga y dispuestos a negociar. La respuesta del Gobierno, que logra armar un aparato de emergencia para mantener el funcionamiento del país, la incapacidad de adscribir a la huelga a los sectores populares y la enorme capacidad de movilización de éstos contra el paro y en apoyo del Gobierno, agrupándose en torno a las organizaciones de clase y creando nuevas formas organizacionales complementarias de los sindicatos tradicionales, permiten solucionar la crisis favorablemente para el Gobierno y la UP con la incorporación al Gabinete de las FFAA y de prominentes políticos de la UP, entre ellos, el Presidente de la CUT.

En esta crisis, esquemáticamente descrita, llaman la atención cuatro elementos fundamentales.

En primer lugar, el liderazgo en su diseño de la Derecha¹⁹ que logra arrastrar al movimiento a la DC, temerosa de quedar aislada de una masa a la que la propia crisis radicalizaba. En efecto, la generalización del conflicto sólo cobraba su plena lógica en la perspectiva de un enfrentamiento decisivo, donde el caos de la paralización del país demostrara a los militares que ellos eran el único recurso para mantener la institucionalidad.

En segundo lugar, el rol preponderante que adquieren las organizaciones gremiales de capas medias, sean ellos comerciantes, transportistas, estudiantes, profesionales o técnicos, cuyas acciones son de algún modo coordinadas por las grandes organizaciones patronales de los diversos sectores de la economía. Los niveles de organización y el estado ideológico alcanzado por los gremios de las capas medias revelan, por un lado, el clima emocional de estos sectores. Pese a las reiteradas garantías ofrecidas por el Gobierno, tanto la estrategia económica de la UP, como la propaganda ideológica de la oposición, como el temor irracional a la reivindicación de las clases populares en tanto sujetos de la política, habían sumido a estos sectores en un clima de inseguridad en que la amenaza de pérdida de sus posiciones alcanzadas en el sistema socioeconómico y político chileno aparecía como creíble. Por otro lado, los estilos de acción agitativa y niveles de coordinación y organización alcanzados por estos grupos habitualmente dispersos, revelan una fusión de intereses, producto de un trabajo político y una conexión operativa entre los líderes de estas organizaciones y el PN. Desde el punto de vista de la Derecha y de los sectores extranjeros interesados en el derrocamiento del Gobierno, transformar a los gremios en fuerza desencadenante era fundamental para legitimar el movimiento ante la DC y lograr su concurso para demostrar el carácter nacional de la Oposición y el deterioro de la base popular del Gobierno.

En tercer lugar, la capacidad enorme de movilización popular en torno al Gobierno, al que se percibe como amenazado en su subsistencia. Las discrepancias en la cúpula política de la Unidad Popular son en cierto modo superadas por el grado de cohesión y organización de la base popular, tanto en torno a sus organismos de clase y partidos como en torno a nuevas organizaciones. Es el momento de máxima movilización política de las bases sociales de la Unidad Popular, en que las masas de la Izquierda son activas con disciplina y, al mismo tiempo, iniciativas propias.

¹⁹ No deben olvidarse las revelaciones hechas por el Senado norteamericano y otras evidencias posteriores sobre el papel de la CIA en el diseño y financiamiento del Paro de Octubre, al igual que la huelga de julio-agosto 1973.

En cuarto lugar, el tipo de solución dado a la crisis con la incorporación de los militares al Gabinete. Estos rompen así su relativo aislamiento y, pasan de algunas tareas puntuales que les había entregado la UP en estos años, haciendo crecer considerablemente su importancia social, a desempeñar altas responsabilidades políticas. Los llamamientos apresurados de la Derecha a una alternativa autónoma por parte de los militares —expresión de la impaciencia de clase frente al proceso de estatización económica— no contaban con el ritmo más lento de desarrollo de la crisis militar y con el hecho de que a esas alturas no había madurado un proyecto autónomo entre ellos, prevaleciendo su socialización constitucionalista y los valores de disciplina jerárquica. En esta etapa tal proyecto autónomo se manifiesta sólo en una forma primaria a través de la convicción de que eran la fuerza más legítima para pacificar la situación política. La aceptación, con su incorporación directa al rol de sostén de un Gobierno constitucional, implicaba que estaba presente en ellas su significación política, sin que existiera la unidad suficiente para abandonar el principio tradicional de apoyo al Gobierno constitucional. Para la DC la incorporación de los militares al Gobierno significaba la posibilidad de romper el encajonamiento a que había llevado la crisis de octubre y de asignarles el rol de garantía de estabilidad del sistema, hasta que el conflicto político pudiera resolverse en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. La izquierda, luego de largas discusiones y con la percepción de la situación como pre guerra civil, promueve la participación de los militares en el Gobierno, viendo en ella no una alianza o compromiso, sino el aval de fuerza necesario para continuar realizando su Programa.

V

Una vez resuelta la crisis de octubre, la Derecha comprueba el carácter prematuro de sus esperanzas y la DC reafirma su convicción respecto a la primacía del conflicto institucional. Ello le da a la lucha por las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, una importancia crucial. Para la Oposición, ellas tienen un carácter plebiscitario, donde la DC espera un deterioro político tal del Gobierno, que lo obligue a rectificar radicalmente, y el PN espera poder derrocarlo constitucionalmente, entendiendo que cualquiera que fuese el resultado, la lucha debía continuar en otro estadio. Para sectores de la Izquierda, representados por Allende y el PC, se trata de un momento decisivo para el curso del proceso, en tanto para el Partido Socialista es sólo una batalla más.

La UP enfrenta las elecciones en un clima especialmente negativo. Por un lado, recrudecen los problemas de desabastecimiento, provocados tanto por las consecuencias del paro de octubre, como por desarticulación general

del mercado, debido a la especulación y el acaparamiento de productos por productores y comerciantes y mercado negro, así como a ciertas deficiencias del aparato estatal de distribución. Ello lleva al Gobierno a anunciar medidas de control que incluyen formas de racionamiento, lo que provoca nuevos debates y conflictos. Por otro lado, las discrepancias internas del bloque se expresan en una crítica del sector más izquierdista, tanto a la conducción global del proceso, como a la aceptación, por parte del Gobierno, de algunas reivindicaciones de la Oposición, anunciada por el ministro del Interior, general Prats, comandante en jefe del Ejército, lo que es visto como una transacción que impide el avance socialista. Finalmente, el cerco institucional contra el Gobierno se estrecha cada vez más por la ofensiva legal de la Contraloría contra las requisiciones ordenadas por aquél, lo que plantea problemas a los militares en el Gabinete, y por las decisiones del Poder Judicial de limitar la acción del Gobierno en las empresas expropiadas y acusar a importantes autoridades de gobierno que cumplen funciones de control de abastecimiento y de mantención del orden.

La participación de los militares en el Gobierno es criticada desde una doble perspectiva por la Oposición, luego de su aceptación inicial como garantía democrática para las elecciones. Por un lado, la DC intentando desligar a Prats del resto de las FFAA, por otro lado, el PN y los gremios insistiendo en la ineficacia global de la gestión militar. Hay allí el intento de desligar a las FFAA de sus compromisos con el Gobierno para que asuman su papel de alternativa autónoma frente al conflicto generalizado. Esta línea no es seguida pues era prematura en una etapa cuyo sentido estaba dado por las elecciones.

Sin embargo, esa táctica y la violencia terrorista por parte de grupos opositores, entre enero y febrero de 1973, —bombas, sabotajes a instalaciones eléctricas, asaltos contra vehículos fiscales, etc.— muestran el doble ritmo de esta fase: uno se orienta hacia las elecciones de marzo de 1973, el otro prepara las condiciones para después.

Pero el resultado de las elecciones, en que la UP obtiene el 43.4% de los votos, disminuyendo su participación en el electorado inscrito en un margen apenas superior al 1% respecto de las elecciones municipales de 1971, no le dan a la Oposición la mayoría necesaria para derrocar constitucionalmente al Presidente, ni tampoco le sirven para obligar a la UP a una cancelación de su Programa, imputándole debilitamiento del apoyo popular. La estrategia política de la DC, como centro que se desplaza entre dos bloques evitando la polarización, estructurada por su Directiva pensando en resultados electorales diferentes, comienza aquí su ocaso definitivo. La previsión de la Derecha de entablar la lucha política en otro estadio, cobra desde ahora su plena vigencia.

La Unidad Popular, sacudida por sus discrepancias internas, no logra aprovechar las condiciones favorables creadas por las elecciones. Las exigencias sobre el curso político, planteadas por el Alto Mando de las FFAA para no deteriorar su correlación de fuerzas internas, tienen

como resultado su salida del Gabinete. Para importantes sectores de la UP, un compromiso con las FFAA en un nuevo nivel cualitativo como el que se replanteaba, implicaba un retroceso frente a un proceso que debía descansar más en las energías populares que en los arreglos de cúpula, dado, además, que se trataba de una fuerza que en un determinado momento podía imponer sus condiciones. Como la colaboración ministerial en este nuevo plano agudizaba los problemas internos del bloque, Allende decidió prescindir de ella.

VII

Así, el período post electoral tiene el carácter de preparación de un enfrentamiento definitivo sin que haya claridad ni consenso en la UP sobre el carácter del mismo y las respuestas posibles. La violencia desencadenada por la Oposición, tanto en su forma de violencia de masas, suscitada a propósito del proyecto de transformación educacional del Gobierno o de la huelga en la mina de cobre El Teniente, como en su forma de violencia terrorista, impulsada por los grupos extremos de Derecha, muestran la situación amenazante de guerra civil que denunciaba el Gobierno.

La DC es impermeable frente a esto, por cuanto el ciclo de polarización interno ha llegado a su fin en Mayo de 1973, cuando la Directiva centrista es desplazada por la "derecha" del Partido.

Los principales conflictos en los meses posteriores a la elección ilustran este carácter. Por un lado, el proyecto de creación de la Escuela Nacional Unificada (ENU), esquema democratizante y modernizador del sistema educativo, es combatido ideológicamente por la Oposición, intentando sensibilizar dos sectores clave con los que no se había contado hasta el momento, la Iglesia y las FFAA, cuya intervención es decisiva para retirar el proyecto, ante lo cual recrudecen las críticas internas en la UP, que ven en esto un nuevo retroceso. Por otro lado, la huelga del mineral El Teniente busca radicalizar el apoyo de sectores de clase obrera —ausentes para la Oposición en octubre de 1972— con activa movilización de los elementos más extremos del movimiento estudiantil. Finalmente, se llega al impasse definitivo en el conflicto institucional, donde el Tribunal Constitucional se declara incompetente frente al problema suscitado por los vetos del Presidente al proyecto de la DC de las áreas de la economía, aprobado por el Congreso y no quedando entonces instancias de arbitraje institucional.²⁰ Este conflicto había sido nuevamente activado

²⁰ Parece necesario hacer un rápido recuento de los diferentes trámites a que fue sometida la Reforma Constitucional sobre las áreas de la economía durante los 18 meses de tramitación parlamentaria. Este proyecto fue presentado por los

por la DC ante la requisición de un importante número de industrias, decretada por el Gobierno.

Paralelo a esta ofensiva de masas e institucional de la Oposición, preparando condiciones para una resolución definitiva de la lucha política, se desarrolla en la base popular de apoyo al Gobierno un intenso proceso de organización y movilización. Las nuevas formas de organización popular —Comandos Comunales y Cordones Industriales, surgidas en la crisis de octubre— obedecen a una lógica en gran parte espontánea de organizar territorialmente la defensa del abastecimiento y el consumo, coordinar la movilización en defensa del Gobierno y asegurar en la base la unidad interpartidaria de la Izquierda, cada vez más difícil en la cúpula.

Pero, en toda esta fase, hay un desarrollo secreto: la pugna por atraer a las FFAA, hacia lo cual se dirigen u orquestan todos los temas del bloque opositor.

Así, el 29 de junio se produce el alzamiento de la unidad blindada más importante de Santiago, cuyos tanques rodean la sede del Gobierno. Este intento, en el que la participación de grupos civiles quedó demostrada con el asilo político del dirigente máximo de Patria y Libertad, fracasó ante su aislamiento y la disposición demostrada por el Comandante en Jefe del Ejército, que encabezó las fuerzas militares disponibles, y los Altos Mandos. Sin embargo, dejó en claro varios puntos en relación al diseño de derrocamiento del Gobierno. En primer lugar, la no existencia de una fuerza militar propia de la UP y su dependencia militar de las FFAA. Las organizaciones de base popular eran importantes en tareas políticas de movilización y de desarrollo de aparatos económicos de emergencia, pero en un enfrentamiento militar, su importancia quedaba entregada a la posibilidad de apoyo en el caso de división de las FFAA. En segundo lugar, el episodio muestra la importancia de la legitimidad jerárquica dentro de las FFAA y la importancia primordial asignada a su unidad interna.²¹ Esta disciplina juega en estos momentos a favor del Gobierno, que descansa a su vez en la lealtad del

senadores DC Juan Hamilton y Renán Fuentealba, el 20 de octubre de 1971. El proyecto fue aprobado por el Congreso Pleno el 19 de febrero de 1972. El proyecto fue vetado por el presidente, pero el Congreso rechazó algunos vetos por mayoría, produciéndose entonces el conflicto con el Ejecutivo. Allende recurrió al Tribunal Constitucional. Al declararse éste incompetente, promulgó el proyecto parcialmente, lo que fue rechazado por la Contraloría, por considerarlo ilegal. Para fundar la incompetencia, el Tribunal Constitucional arguyó que se trataba de una Reforma Constitucional, respecto a la cual no tenía capacidad de juicio pues su misión se refería a los conflictos respecto de la constitucionalidad de las leyes.

²¹ Algunos de los máximos personeros del actual régimen militar se han referido a este alzamiento señalando su carácter "bien intencionado" y criticándolo exclusivamente desde el punto de vista de la impaciencia y no respecto de las decisiones de los organismos regulares.

Alto Mando y especialmente en el Comandante en Jefe del Ejército. En tercer lugar, el episodio muestra el estado ideológico de la Oposición, que rechaza la dictación de una Ley de Estado de Sitio que le permita al Gobierno desarticular los mecanismos civiles de un golpe y que se niega a darle al incidente su importancia. A estas alturas, todos los medios para eliminar al Gobierno parecen legítimos a la Oposición, siempre que sean eficaces.

VIII

A partir del intento fracasado del 29 de junio, que permite constatar los valores de disciplina jerárquica y unidad internas en las FFAA, se desencadena un proceso de deterioro de las relaciones entre el Gobierno y las FFAA, producto tanto de los ataques y vejaciones de sectores de la Oposición al general Prats, buscando así socavar su legitimidad jerárquica, como de la aplicación de la Ley de Control de Armas por parte de las FFAA contra las organizaciones populares de la UP, sin tocar siquiera a las organizaciones terroristas de Derecha, como del fracaso del Gabinete con presencia de los Jefes de las FFAA, llamados por Allende como último recurso para salvar la situación, como de la denuncia del Almirantazgo de un plan izquierdista de infiltración en la Armada. En el interior de las FFAA ya se ha desarrollado la crítica a las posiciones constitucionalistas, a las que se les imputa un carácter abstracto frente a la crisis que se vive y tiende, así, a expresarse el contraproyecto militar en ciernes: Gobierno autoritario fuerte e impersonal realizado por la fuerza, que constituye la reserva moral de la Nación. De este modo, ante el fracaso de las nuevas conversaciones del Gobierno con la DC, en julio-agosto de 1973, el Gabinete con participación militar agrava el deterioro de las relaciones Gobierno-FFAA y eso porque si en octubre de 1972 los militares podían tener esperanzas en la trascendencia política de su papel en el Gobierno, en agosto de 1973 saben que el Gobierno no cambiará su carácter revolucionario y que se los llama a enfrentar la sedición en marcha. La dimisión forzada de Prats en la segunda quincena de agosto, ante el deterioro de su legitimidad jerárquica y la insubordinación abierta de algunos generales, implica la desaparición del último obstáculo para que las FFAA obtengan la unidad interna en torno a una alternativa autónoma. A partir de ello, sólo quedaba poner en ejecución las operaciones del golpe que se llevará a efecto el 11 de septiembre de 1973.

Paralelo a este desarrollo en las FFAA, tienen lugar dos líneas de acontecimientos en los meses de julio y agosto. Por un lado, el fracaso de las conversaciones promovidas por el Presidente y el Cardenal de la Iglesia Católica para buscar un acuerdo mínimo con la DC. Ellas se

realizan, por otro lado, en un clima de violencia y atentados desencadenados por los grupos de Derecha terrorista, de llamados a las FFAA, de campañas públicas para obtener la renuncia de Allende, de denuncia de fraude en las elecciones de marzo, para negar la legitimidad de ese mecanismo institucional y de una nueva huelga de transportistas, Gremios y Colegios Profesionales, a la que se le da explícitamente el carácter de definitiva. La DC plantea bases de discusión que hacen imposible la negociación pues implicarían por parte del Gobierno el reconocimiento público de haber actuado en la legalidad y el cambio radical de su carácter revolucionario. Detrás de ello hay la clara percepción por parte de la DC de que si las negociaciones fructificaran sin un cambio en la naturaleza del Gobierno, sería arrasada por el PN y perdería toda influencia en el bloque opositor. La Izquierda no puede aceptar alterar radicalmente el carácter del Gobierno porque quebraría asimismo tanto su bloque político como su base social de apoyo.

Así, canceladas estas negociaciones, quizás destinadas desde su inicio al fracaso, la DC promueve y apoya en el Parlamento la declaración de ilegalidad del Gobierno. Era sólo un rito necesario pues las decisiones se tomaban, a esa altura, fuera de ese recinto.

La UP, abandonada a su sola legitimidad constitucional y al apoyo de una extensa base popular desarmada, no tenía las fuerzas para enfrentar una guerra cuyos promotores sabían unilateral.

IV. LOS PROCESOS DE TOTALIZACIÓN DE LA CRISIS

Tratemos de extraer algunas conclusiones sobre el significado global del proceso descrito, para luego hacerlo sobre la racionalización de los bloques políticos.

Hemos dicho que el carácter general de la lucha política está dado en torno a la naturaleza del proyecto sociopolítico de la UP y al enfrentamiento entre los intentos por realizarlo y los intentos de anularlo o eliminarlo.

Pero aunque el contenido anticapitalista del proyecto de la UP explica el carácter de la oposición de los intereses capitalistas y aunque el comportamiento de la DC en esta materia estuvo plagado de ambigüedades, él no explica por sí solo el proceso de polarización política.²²

Si se analiza este proceso, nos damos cuenta que él tiene tres tiempos.

²² Respecto a la mencionada ambigüedad, recuérdese que el principal conflicto institucional del período se originó a raíz del proyecto de las áreas de la economía, presentado por la DC a través de dos de sus senadores y por el que se entrababa la política de expropiaciones del Gobierno.

Hasta octubre de 1972, la DC actúa siguiendo una línea de distancia y acercamiento discontinuo frente a ambos polos. En octubre de 1970 colabora con sus votos a la ratificación de Allende por el Congreso Pleno; durante el período preelectoral, que culmina en abril de 1971, acentúa su distancia, buscando fortalecer su propia identidad y por lo tanto atacando duramente al Gobierno pero sin acercarse orgánicamente a la Derecha; después de las elecciones se insinúan posibilidades de compromisos parlamentarios con la Izquierda. Como consecuencia del asesinato de Pérez Zujovic y de la división de la DC, se invierte ese proceso, produciéndose un mayor acercamiento con la Derecha, que se concretiza en pactos electorales a diversos niveles. Sin embargo, al sentirse desbordada por una ola de movilizaciones que no controla, se decide a iniciar conversaciones con la UP, buscando siempre obligar a la UP a actuar dentro de un marco legal que, al aceptarlo plenamente, le exigía compromisos y negociaciones que ésta percibe como cancelación de su proyecto.

Es evidente que después de julio de 1972 la DC, todavía dirigida por su tendencia centrista, abandona la línea del compromiso, urgida por la exigencia de evitar su aislamiento respecto de una masa radicalizada. En ese terreno, el distanciamiento que se produce entre el Gobierno y sectores importantes de las capas medias, repercute en la DC.

A partir de octubre de 1972, la polarización se hace casi completa. Desde entonces y hasta mayo de 1973, aunque sigue preocupada de mantener la especificidad, sobre todo de sus discursos, frente a la Derecha, sus movimientos pendulares son incompletos. Su crítica se centra en el Gobierno, sin denunciar en ningún momento el desarrollo de una ofensiva que conducía al golpe militar.

En mayo de 1973, con el cambio en la dirección del Partido, se cierra el ciclo de polarización, aunque hacia fines del período se realiza una nueva rueda de conversaciones. Nos parece claro que ese "diálogo", como se le llamó, estuvo vacío de sentido, por lo menos político. A esa altura la DC no busca llegar a un compromiso con el Gobierno y, quizás tampoco, ese compromiso habría sido capaz de cambiar el curso de los acontecimientos, sino sólo de acelerar o retrasar su ritmo. A través del período, la DC casi no es un sujeto político, un actor que pueda determinar con autonomía su línea de conducta: está atrapada en la posición céntrica de un proceso de lucha política agudizada, donde se multiplican las presiones centrífugas. En mayo de 1973 había dejado de serlo absolutamente. Sus intereses organizacionales la habían obnubilado e impedido, así, comprender el carácter universalista del apoyo popular al Gobierno y la naturaleza ineludiblemente represiva y antipopular de cualquier régimen que la derrocaria.

Es importante captar el significado de esa pendulación y conectarlo con la clásica tendencia al aislamiento que la DC desarrolla a partir de 1958, cuando se afirman sus posibilidades autónomas de poder. Ninguna

de estas dos características se pueden explicar recurriendo, sin más, al argumento de la ambigüedad típica del centrismo. Más allá de ese elemento, sin duda importante en los momentos en que se enfrenta una situación política con predominio polar, está el problema de la compleja expresión de clase de la DC. Por ahora queremos sólo retener este argumento de un modo global, esperando explicitarlo más adelante.

Decíamos que los contenidos anti-capitalistas del programa de la UP no explican más que parcialmente la dinámica de polarización, porque no dan cuenta satisfactoriamente del comportamiento político del Centro, aunque sólo sea a causa de sus intereses políticos. La polarización política es ajena a estos intereses de Centro. Este soporta mal los cuadros de exacerbación de la lucha política que ponen en tensión las contradicciones latentes en las organizaciones de reclutamiento diversificado. Además la restricción del campo de maniobra política que acompaña los procesos de polarización perjudica a las capas medias, que son los sectores que el Centro representa más específicamente, las cuales han estado habituadas a la posibilidad de combinaciones múltiples y fluctuantes para realizar sus intereses.

Sin descartar entonces que en la base de la polarización estén presentes los contenidos del programa de la UP, pensamos que es necesario analizar otros factores que den cuenta de este proceso al menos respecto de las capas medias y la DC. Algunos de ellos actúan como originantes y otros como multiplicadores o aceleradores. Señalemos, a modo de hipótesis, los siguientes: a) la semantización del proceso por parte de la UP como socialismo y revolución dirigida por la clase obrera; b) las modalidades de la acción política de la UP; c) el desarrollo de una crisis que se expresa en violencia o desorden político y en escasez; d) la fascistización ideológica que va produciendo la propia polarización y sus secuelas, los conflictos, las huelgas, los enfrentamientos.

La tendencia difícilmente evitable de la UP a expresarse en los términos de una revolución dirigida por el proletariado y en la que otros sectores eran "aliados" y a usar símbolos y ritos consiguientes no era accidental: revela tanto una tradición teórica como que el proceso era vivido por los dirigentes y por gran parte de la masa como tal. Aunque es evidente que la UP significó una ruptura y un quiebre de la continuidad en muchos aspectos, ese tipo de semantización chocaba a muchos sectores de las capas medias, cuya ideología tenía muchos elementos que componen el tipo clásico pequeño-burgués: aversión a lo "plebeyo" y distanciamiento de lo obrero, amor al orden, veneración a la propiedad; y también chocaba a los representantes políticos de esos sectores por las razones que hemos anotado, a las cuales hay que agregar un fuerte anti-comunismo y un temor de ver copado el campo político.

El otro factor, las modalidades que asume la acción política de la UP, tiene una importancia aún mayor, porque actúa directamente sobre la DC. En páginas anteriores hemos mostrado que los principios constitutivos del orden político eran la negociación, el compromiso y la gradualidad expresados institucionalmente en el equilibrio de poderes y en un sistema de atribuciones cuidadosa y a veces sutilmente contrabalanceadas.

La UP, impulsada por la necesidad de implementar su proyecto sociopolítico y por las expectativas populares y, además, acicateada por el fantasma de lo que se consideraba el fracaso de los reformismos, puso en práctica desde muy temprano una estrategia que, si bien se sustentaba en argumentos jurídicos de peso y se enmarcaba en la legislación vigente, cuestionaba los principios señalados en que se basaba el sistema, aquéllos que constituían una de las bases principales del consenso alcanzado por las fuerzas políticas predominantes. En efecto, al ser rechazados esos procedimientos legales por los otros poderes del Estado, plegados a la racionalidad capitalista, se creaba una crisis de legitimidad legal.

Esta forma de desinstitucionalización producida por la modalidad de la UP de sobrepasar la negociación impuesta por el sistema y de superar las barreras del gradualismo, agudiza como efecto otra forma de desinstitucionalización ya presente en la estrategia inicial de sectores de la Oposición: el cambio de la arena del enfrentamiento político. Es evidente sin embargo que esas opciones previas tenían, pese a su contigüencia, su racionalidad. La UP, que deseaba preparar las condiciones de una transformación global de la sociedad, necesitaba acumular fuerzas y, para ello debía desarrollar un programa integral.

A su vez, el ciclo que comienza en octubre de 1972 es el despliegue de una racionalidad antagónica ya existente en algunos sectores, que se opone a la racionalidad de la UP.

La crisis de legitimidad es, así, previa —por lo menos en ámbito de la élite política— a los procesos de desinstitucionalización y polarización. La lógica de la acción de la UP está fundada en la necesidad de una ampliación de los límites del Estado de compromiso con su dinámica de negociación, gradualidad, relativa fluidez y diversificación en la articulación y agregación de intereses; ese Estado es visto como un freno y un estorbo y su orden legal es aceptado instrumentalmente pero no desde el punto de vista valórico. A su vez la lógica de la acción de la Derecha, y en cierto grado de la DC, revela que la democracia como orden político les interesaba desde el punto de vista de clase, sólo cuando permitiera el capitalismo. Es decir su adhesión también era instrumental pero su acción ideológica invertía totalmente esa realidad, puesto que a nombre de la democracia desarrolla las condiciones para su quiebre. Así el principio de legitimidad valórica de la acción era la lucha por la libertad, aunque el sentido de la acción era preparar las condiciones del golpe y ese sentido era visible para los actores, por lo menos desde octubre de

1972 para adelante. Desde ese momento, como sucede muchas veces en las situaciones de crisis, tiene lugar una degradación de los valores que se usan para legitimar la acción, los cuales son utilizados, en definitiva, como máscaras.

Sin embargo, ese tránsito desde una crisis de legitimidad inicial al nivel de las élites políticas, entre las cuales se debilita la adhesión instrumental y condicionada al régimen; y esa degradación final, donde los discursos sobre la libertad son esgrimidos como coberturas, es el producto de la crisis, la cual amplifica esa fisura inicial. A través de la masificación y exacerbación de la lucha política se masifica también la idea de que cualquier medio es bueno para derrocar al Gobierno. Desde octubre de 1972 en adelante, pero sobre todo desde mayo o junio de 1973, ya no se está en el campo de la política sino en el campo de la guerra desigual, por lo que no es raro que los valores que se esgrimen escondan las artimañas que se usan en la batalla. Por ello, la incuestionable legitimidad constitucional del Gobierno no podía ya ser un freno para la búsqueda de su derrocamiento.

Estos procesos de desinstitucionalización - polarización - deslegitimación son aquellos a través de los cuales se desarrolla la crisis del régimen político. Desde el punto de vista del sistema político, el problema principal parece ser su incapacidad de soportar la destrucción del equilibrio céntrico. Este desplazamiento geométrico tiene un primer origen en la racionalidad de desinstitucionalización de la Derecha, que para defender el capitalismo busca anular o eliminar al Gobierno. Cuando la lucha política se plantea en esos términos, ya existe una destrucción virtual de la base de legitimidad del sistema. Desde la Izquierda este desplazamiento ocurre en cuanto ella busca realizar su programa sin caer víctima de una legalidad de negociación y cambio gradual que cancelaría su proyecto sociopolítico y la empantanaría en el reformismo, frustrando su base popular. No hay aquí, en sí, una racionalidad de desinstitucionalización, excepto que no se logren las mayorías institucionales para realizar el proyecto.

Planteadas así las cosas, que el quiebre haya demorado tres años tiene una doble explicación a) el atractivo y fuerte apoyo popular que el Gobierno conservó casi sin deterioro durante esos tres años y que se expresa también en los resultados electorales; las energías de movilizaciones surgían de la esperanza revolucionaria de obreros y campesinos, los cuales habían tomado en sus manos el control de la producción en asentamientos, fábricas, la organización del abastecimiento en las JAP, la agitación política, la organización de las masas y la defensa del Gobierno en los sindicatos, en los Cordones Industriales o en los Comandos Comunales. En esta adhesión están presentes no sólo los indudables beneficios económicos y sociales recibidos por los sectores populares, sino una alta conciencia política y la identificación de una parte sustancial de ellos con una experiencia social y política que los reivindicaba

como los actores de una historia que hasta entonces los había marginado. b) El ritmo lento y discontinuo del ciclo de polarización política, lo cual permite que se mantenga la esperanza de soluciones negociadas hasta octubre de 1972 y de un retroceso del Gobierno, hasta marzo de 1973.

V. LA RACIONALIDAD DE LOS BLOQUES POLÍTICOS

Un análisis profundo del período requeriría detenerse en los diversos actores del proceso social; sin embargo, para los efectos de este trabajo, circunscrito al desarrollo del conflicto político, nos centraremos exclusivamente en los actores políticos, considerados por bloques.²³

Empecemos por la DC, cuyo caso presenta una dualidad profunda entre la significación aparential y la significación real de su acción. Tanto la posición en el campo de fuerzas, como la relevancia interpretativa que le hemos dado al ciclo de polarización política, le otorgan a la DC una gran importancia en la evolución del proceso, sin embargo, la DC es, de todas las fuerzas, aquella que menos se puede definir en términos de acción histórica porque está atrapada por las contradicciones, racionalidades y conflictos que los polos desarrollan. El significado profundo de su lucha del período es la conservación de su identidad, interés principal de su clase política dirigente cualesquiera fueran sus diferencias contingentes, a través del mecanismo de la doble oposición, dentro de un campo lleno de presiones centrífugas. No puede, en parte por ella misma y en parte por la UP, llegar a un compromiso con la UP y se resiste a la alianza con la Derecha porque quiere preservar sus intereses políticos de largo plazo. Cede a las presiones centrífugas que tratan de arrancarla de la posición de centro fluctuante cuando ya era demasiado tarde para imponer un diseño que preservara su condición de actor político significativo.

Para entender la problemática de este actor político hay que remontarse a su pasado. Después de haber sido desde su fundación el partido de una élite católica preocupada por la cuestión social y de los cambios, que pretendía separar a la masa católica de la opción política conservadora,

²³ Los riesgos de este tipo de análisis son evidentes, en cuanto no permiten recuperar el comportamiento de las clases en forma autónoma de sus representantes políticos. La consideración por bloques permite, sin embargo, al menos apuntar a los problemas de representación que enfrentan los agentes propiamente políticos o partidarios. En el nivel de la "escena política" en que nos movemos, este enfoque, aunque insuficiente, es un primer paso ineludible. Recuérdese el matiz necesario del concepto "racionalidad de los actores".

se empieza a convertir desde 1958 en un partido que, sin perder esa definición ideológica, pretendía atravesar todas las clases y grupos de la sociedad, tanto desde el punto de vista de la militancia como de las esferas de influencia social y electoral. De hecho, consigue este carácter "nacional" sólo de modo parcial, sin dejar nunca de expresar, ideológica y socialmente, principalmente a las capas medias, de lo que es una buena ilustración de la naturaleza de las reivindicaciones contenidas en el Estatuto de Garantías en Octubre de 1970. Esta atracción de la DC en los sectores medios se fundaba: a) en las ventajas que se le asignaban al centro en materia de alianzas y de posibilidades de representar intereses; b) en la importancia del catolicismo, como núcleo ideológico irradiante que sirve para orientar las referencias de los sujetos en el terreno político como en otros y, también, para articular las relaciones con la Iglesia Católica y aprovechar su influencia social; c) en el alternativismo ideológico, cuyo carácter abstracto crea un amplio espacio para la presencia decisiva de una élite y un programa tecnocráticos y cuya expresión le permite a la DC recoger la inquietud generalizada por cambios, pero ofreciendo una solución gradualista.

Esos mismos elementos, pueden explicar —por lo menos en parte—, no sólo la atracción sobre las capas medias, sino también la atracción sobre cierto tipo de sectores obreros católicos y anti-comunistas y también sobre sectores de burguesía modernizante.

Simultáneamente esa combinación de reclutamiento en abanico e ideología alternativista —tan típica del pensamiento socialcristiano— actúa para impedir que la DC realice con fluidez compromisos políticos globales. Esto se observa nítidamente durante su período de Gobierno, cuando tiene la posibilidad de ejecutar lo que había proclamado. Allí realiza una política efectiva de modernización capitalista y de reformas sociales que le permiten organizar desde arriba a algunos sectores hasta entonces marginados del sistema nacional de negociación, pero termina su período en un absoluto aislamiento político.

Una de las claves de ese fracaso político reside en la asimetría entre un acusado sentido de misión histórica y de alternativa de poder de largo plazo y la absoluta ausencia de una estrategia razonable para realizar esa vocación o para permitirle quebrar el enigma de tres fuerzas, donde necesariamente tenía que caer en una dinámica de negociación.

La DC eludía ese problema, pensando que lo resolvería mediante la absorción y el renucleamiento de las bases sociales de las otras fuerzas políticas, desconociendo así la real institucionalización del sistema partidario, donde se observaba una estabilidad del voto de la Derecha y de la Izquierda, por cierto que con caídas coyunturales.

Al principio del gobierno de Allende, la DC, robustecida en su clase política y tecnocrática durante su gobierno y con influencia cristalizada en una gama de instituciones sociales, vuelve a caer en la ilusión que

fue su tema durante la fase entre septiembre y noviembre de 1970: no hay otra alternativa democrática de cambios. Ella cree entonces, como lo creyó cuando en 1965 la Derecha fue barrida electoralmente, en un desplazamiento permanente de la base social y electoral más conservadora. Quizás no era irracional tal cálculo, porque la derrota de Alessandri frente a Allende y el asesinato del general Schneider, tenían sumida a la dirección política de la Derecha en la confusión y porque los representantes corporativos del capitalismo preconizaban públicamente una estrategia moderada y de acomodación. Sin embargo, los resultados electorales de Abril de 1971, demuestran que el Partido Nacional no sufría una crisis de representación política sino una crisis momentánea de expresión política.

Las fluctuaciones de la DC durante todo el período se explican tanto por el interés de su clase política en mantener la identidad organizacional, como por aquello que era su virtud como organización de masas, reclutamiento diversificado y alternativismo ideológico. En el marco de una desinstitucionalización de la lucha política, a la que la DC contribuye de hecho, este centrismo social e ideológico-político no le permite jugar un rol de sujeto y en la práctica, como hoja al viento es llevada de un lado para otro por la contingencia, víctima de presiones contradictorias que nunca resuelve en los momentos adecuados.

Al principio del gobierno de Allende no se juega a fondo en una línea de compromiso y de alianza con la UP porque la obsesión de la identidad y el peso interno de sectores ligados al capitalismo, la enredan en una opción de corto plazo; más adelante, su alternativismo ideológico, la presencia popular, la fuerza de consideraciones doctrinarias en las decisiones de los dirigentes y las divisiones internas le impiden jugar plenamente una estrategia de dirección de la oposición, asumiendo para ello plenamente el carácter de lucha frontal que iba adquiriendo la política. Acepta ese rol, cuando ya no había solución institucional viable y cuando su papel carecía, por lo tanto, de significación.

Su carácter organizacional, muy eficiente en las situaciones de enfrentamiento político atenuado, se transforma en las situaciones de agudización del conflicto en un obstáculo y en un factor de esterilidad política.

II

Al contrario, la Derecha se recupera parcialmente durante este período de la debilidad política constante que había tenido desde 1938. Esa debilidad significó su desplazamiento en el control del Gobierno por el Centro semi-reformista o reformista desde 1938 hasta 1958 y desde 1964 hasta 1970.

Hemos señalado que la estabilidad del centrismo como fuerza gobernante reposaba sobre ciertas condiciones que lo hacían orgánico: a) fue capaz de responder a una crisis del desarrollo hacia afuera, impulsando la industrialización y la transformación del Estado en un agente económico activo; b) desarrolló una política de democratización económica, social y política que le aseguró la lealtad de los sectores medios; c) tuvo, hasta el período de Frei, una gran fluidez y flexibilidad en materia de compromisos y de alianzas, permitiendo una gran agregación de intereses, al mismo tiempo que mantuvo ciertas importantes exclusiones sociales permanentes como la de los sectores campesinos y marginales urbanos y fue capaz de jugar con exclusiones políticas temporales, como la del Partido Comunista entre 1947 y 1957; d) permitió —porque convenía a sus propios intereses políticos— una política de acomodación, por parte de los grupos capitalistas.

Dentro de ese campo de alternativas restringidas, la Derecha tuvo que consagrarse a partir de 1938 a una política defensiva, diferenciándose del centrismo, porque éste expresaba la dirección de otros grupos, pero manejando una política pendular de acercamiento-distancia. No declara la guerra frontal a los partidos gobernantes, por lo menos hasta 1964, y tampoco busca fusionarse con ellos, manteniendo para sí la representación política de las clases dominantes.

En este cuadro, lo interesante es que esas clases no abandonan a sus representantes tradicionales cuando el “trasvasije” hacia el centro parecía una estrategia racional puesto que el centrismo era predominante y tendía a una política pendular, de alianzas de gobierno con la Izquierda, que obligaban a la Derecha a multiplicar las tácticas de acomodación y ajuste.

Este fenómeno tiene estrecha relación con la naturaleza de las clases que hemos denominado genéricamente predominantes, en el interior de las cuales era muy significativo hasta 1964 el peso de la fracción latifundiaría. Esa significación estaba relacionada, entre otros, con dos factores. En primer lugar con las vinculaciones entre capital financiero, comercial, industrial y propiedad latifundiaría que otorgan a estas clases su carácter indiferenciado. En segundo lugar con la importancia social y política del campo. Por un lado, la propiedad de la tierra proporcionaba status, acceso a la cerrada “sociedad” de la época, con sus ceremoniales que trataban de imitar —con modalidad provinciana— los fastos aristocráticos. Pero el eje de esa importancia residía en que hasta la década del 60 la posesión de la tierra le otorgaba a los grandes propietarios acceso al poder político. Las relaciones sociales agrarias le permitían al hacendado el manejo de una base social propia y, a través del sistema de clientelas rurales, el acceso a los votos que manejaban los caciques agrarios.

El latifundio era una especie de espacio común de todos los sectores capitalistas, de modo que el arcaísmo del sistema latifundario imprimía

su sello en la conducta de esas clases, haciéndolas defensoras de un tipo de relaciones sociales con fuertes rasgos pre-capitalistas.

A su vez el centrismo, para quien era necesaria la política de ajuste y acomodación de la Derecha porque ampliaba su margen de maniobra política, se atiene siempre a los límites marcados por la estructuración de las clases predominantes, como lo prueba la exclusión político social del campesinado, hasta el período que se inicia en 1964.

Esta política entra en crisis entre 1964 y 1970 porque el reformismo centrista de la DC es muy diferente del tradicional. Se niega a jugar una política de negociación que permitiera por parte de la Derecha una estrategia de acomodación y ajuste; trata de quebrar el bloque político latifundio-burguesía, dándole a la reforma agraria y a la sindicalización campesina el carácter de factores de expansión capitalista; pretende —con eso y con un conjunto de medidas de modernización económica— atraer a parte importante de las bases sociales de la Derecha.

Las experiencias del período 64-70 producen la resurrección política de la Derecha, a través de: a) la fusión en uno solo, el Partido Nacional, de los dos viejos partidos históricos, el Conservador y el Liberal; b) algunas sustituciones y recambios dentro de su élite política y c) la influencia ideológica dentro de la nueva organización del "nacionalismo", esto es de aquellos grupos que criticaban a la Derecha histórica en términos de la oposición entre política nacional y política oligárquica.

Esa re-estructuración, a través de la cual se doblegan las tendencias a mimetizarse con el Centro que habían tenido vigencia en los debates internos de 1965, revelaba el deseo de superar el esquema clasista que había tenido la acción de la Derecha. Ya desde 1967 intenta recuperar la capacidad de dirección de capas medias, haciéndose portadora de un programa que buscaba reorientar en otra dirección las expectativas de cambio: recuperación de la decandencia ocasionada por el estatismo exagerado, por el populismo y por la falta de autoridad. Ello cristaliza en el programa de la Nueva República de Alessandri en 1970.

En el período 70-73 la Derecha sólo tiene un corto período de incertidumbre durante el cual los gremios patronales —jugando entonces una política defensiva de acomodación— demuestran una incipiente capacidad de dirección y de movilización. Pero aun en ese período de confusión, empieza a buscar las condiciones de la alianza con la DC, a través de tentativas que, como el Frente de Ideas, caen en terreno todavía estéril. En las elecciones complementarias por un Senador en el extremo austral (junto a las municipalidades de abril 1971) y en las de Valparaíso ese mismo año, demuestra que está dispuesta a hacer sacrificios políticos de corto plazo, cediéndole el campo a la DC, en función de los objetivos generales. La Derecha no antepone nunca durante este período sus intereses políticos a sus intereses de clase. Para atraer a la DC está dispuesta a cualquier concesión, así como más adelante está dispuesta a renunciar

a la participación política, conformándose con la dominación militar y autodisolviéndose como organización política.

Hasta diciembre de 1971 la Derecha, sin contactos castrenses orgánicos y traumatizada por el fracaso de los intentos golpistas de octubre de 1970, realiza una estrategia de anulación del Gobierno a través de una ofensiva política continua, pero sólo a partir de ese momento se lanza explícitamente en una estrategia cuya única salida era el derrocamiento de Allende.

A través de los gremios patronales de grandes industrias y comerciantes y a través de la coordinación de la Confederación de la Producción y el Comercio, dirigida por personeros ligados al gran capitalismo, la Derecha logra dirigir políticamente a las organizaciones gremiales patronales o profesionales de capas medias. De nuevo allí la Derecha tiene una gran ventaja de operación política frente a la DC, puesto que en la decisión de ésta siempre priman los intereses políticos antes que los intereses de clase. A la primera no le importa tanto como a la DC la competencia por la dirección de la ofensiva, sino que busca desencadenarla por cualquier medio, importándole quien capitaliza sólo en términos del objetivo, el derrocamiento de Allende. Para ella no tienen importancia los intereses organizacionales porque está volcada hacia la defensa del capitalismo.

La temática de la lucha política parece organizarse en torno a las ideas de la DC, como lucha por los valores democráticos amenazados pero, como hemos visto, desde octubre ella sólo se estructura aparentialmente en torno a esas ideas, las cuales son sólo consignas ideológicas que recubren un proceso de fascistización. La Derecha recoge instrumentalmente las consignas de libertad y democracia, mientras apuesta todo a una intervención militar. Esconde, por lo tanto, sus verdaderas concepciones del orden político y sus intereses contrarrevolucionarios de fundar un orden autoritario para asegurar, mediante ese artificio, la dirección política efectiva. Así conduce inexorablemente la situación a una salida extra institucional. La Derecha, entonces, se mueve en una lógica de clases.

III

La Izquierda también se mueve en una lógica de clases en la medida que estructura su política en función del socialismo, sea porque lo ve próximo, sea porque piensa el período como comienzo de un tránsito ininterrumpido, sea porque se impone la tarea de preparar las condiciones. Pero, en todo caso, en ella se mantiene el interés por preservar el orden político formal. Esas convicciones respecto a la proximidad del socialismo o respecto a la determinación por el fin último de cada una de las etapas intermedias, eran el resultado de una evolución reciente.

En 1912 se funda el Partido Obrero Socialista, que, a diferencia del Partido Demócrata —en donde habían militado sus principales dirigentes—, era una organización que expresaba exclusivamente intereses obreros y que tenía una ideología revolucionaria, mezcla de elementos anarquistas y marxistas, cuyo sello era un fuerte moralismo. Ya en 1922 se funda el Partido Comunista, el cual sufre después de la muerte de Recabarren un proceso de “standarización” ideológica.

A partir de entonces las evoluciones ideológicas del Partido Comunista están determinadas en gran parte por la línea de la III Internacional y, más tarde, por la línea del PCUS. En 1932, cuando tiene lugar en Chile el corto experimento de la “República Socialista”, el PC todavía sostenía la tesis de la ofensiva general contra el capitalismo para aprovechar las condiciones creadas por la crisis mundial y rechazaba las alianzas con sectores pequeño-burgueses, fiel a la línea aprobada por la III Internacional. Más adelante se plegó a las tesis del Frente Popular aprobadas en el 7º Congreso de la Internacional celebrado en 1935. Después de la guerra asumió las críticas soviéticas al “broderismo” y fustigó las políticas conciliadoras. Cuando a causa de la guerra fría y la bipolaridad, los soviéticos desarrollaron la teoría del papel predominante de la contradicción imperialista, la cual subordinaba las contradicciones con las burguesías nacionales, el PC definió la línea del Frente Democrático de Liberación. Cuando se aprobó la teoría del “tránsito pacífico”, el PC hizo suyas tales tesis.

Estos isomorfismos revelan, por una parte, una gran debilidad ideológica. Esta, a su vez, puede ser explicada por diferentes factores, entre los que pueden señalarse: a) la composición del partido y sus direcciones en donde la mayoría de los intelectuales del aparato son formados en el exterior a partir de una base teórica autodidacta o recibida en las escuelas partidarias, las que reproducen el circuito de dependencia; b) la ausencia en Chile de un fuerte polo ideológico de corte social demócrata que obligara a la polémica e innovación ideológicas. Por otra parte tales isomorfismos revelan también que la perspectiva internacionalista constituía, por lo menos hasta la disolución de la Tercera Internacional el 45, un elemento central de la cultura política marxista.

En todo caso, las tesis del PC después de 1936 no postulan el socialismo inmediato o próximo. Los comunistas planteaban un frente político amplio, que agrupara al mayor número de fuerzas posible y su concepción estratégica era rigurosamente gradual. A esto se unía una mayor flexibilidad en la acción que en las posiciones teóricas, y una orientación a la acción de tipo más instrumental que expresivo.²⁴

²⁴ Esta tipología de orientaciones a la acción ha sido aplicada a los partidos de la Izquierda chilena por Cristián Cox, “Teoría e ideología de la Unidad Popular”, en el Informe de Investigación, *op. cit.*, abril, 1977.

Las tesis sobre el socialismo y la preocupación por vincular las etapas democráticas de la revolución con el socialismo, provienen principalmente del PS. En su evolución interna a este respecto juega un papel importante la Revolución cubana y las teorías desarrolladas a partir de ella.

A diferencia de países como Italia, Francia o Alemania, donde la dualidad de representación de la clase obrera contempla una ala social demócrata encarnada por los PS, en el caso chileno llama la atención la construcción de la unidad de acción entre las dos fuerzas políticas de representación obrera, PC y PS. Esta unidad dura —pese a todas las polémicas, roces, discrepancias públicas y disparidad de tesis— desde 1957 y ella se produce aunque las diferencias entre estos partidos sean de composición, organización y línea política. El PS, más que un partido obrero era un partido popular, que vinculaba clase obrera con sectores profesionales y de pequeña burguesía. Desde el principio, la competencia por una masa electoral común, la influencia trotskista en el interior del PS que se ejerce a través de algunos intelectuales que fueron muy significativos en la primera época y el hecho de representar a bases sociales diferentes, polarizan la relación entre ambas fuerzas. El PS busca desarrollar una nueva concepción respecto a la revolución chilena y latinoamericana y rechaza el stalinismo lo que acentúa su distancia frente al PC. Pero al no construir una visión unitaria y sistemática, impedido por la atomización interna, por la pluralidad de tendencias que lo constituyen y por una racionalidad más expresiva que instrumental, pierde la especificidad inicial y su discurso es sólo una variación un poco más izquierdista.

Desde el 58, pero de un modo más intenso desde el 64, el PS define la línea del Frente de Trabajadores como alternativa a la línea de los Frentes de Liberación. Las nuevas experiencias revolucionarias, los sucesivos fracasos electorales, las crisis internas que había provocado en el PS su propia experiencia reformista de 1952 cuando apoyó a Ibáñez, la crítica a las posiciones internacionales del PC y la búsqueda de una línea propia en esta materia, crearon condiciones para que las tesis sobre el carácter armado y socialista de la revolución tuvieran decisiva influencia interna. Lo interesante es que la constitución de un bloque entre el PC y el PS coincide en el tiempo con todo este proceso de diversificación de líneas. De hecho fue por la presión del PS, y en menor medida de los grupos escindidos del reformismo a fines de los 60, que el Programa de la UP asumió un contenido de preparación de las condiciones del socialismo. La radicalización del Programa compensaba así la incorporación del PR a la alianza a la que el PS se había opuesto tenazmente.

Inmediatamente después del triunfo de Allende, es reemplazado el Secretario General del Partido, vinculado a las tendencias más moderadas. Ese cambio no tuvo nada de accidental: expresaba la voluntad de

jugar frente al Presidente un papel político crítico y activo, y de oponer a su pragmatismo las exigencias que imponía la teoría revolucionaria.

No se ha evaluado todavía lo suficiente el impacto de la Revolución cubana, como elemento ideológico de ruptura en los medios de Izquierda. Creemos que ese impacto fue fuerte en Chile, donde su función de quiebra fue hacer descubrir las insuficiencias de la acción legal, justamente en un momento propicio después de la derrota de 1964. En un país donde la Izquierda había ensayado desde 1938 muchas formas de alianza y de compromiso político, la Revolución cubana aparece como la demostración de las posibilidades de la lucha armada y de la necesidad de una rápida transformación de la revolución democrática en socialista.

Las evoluciones sumariamente descritas están en relación con las modificaciones experimentadas por los análisis intelectuales entre 1964 y 1970. A través de la extrapolación al terreno político de interpretaciones que mostraban los límites del desarrollo capitalista en países con una industrialización relativamente tardía y además delimitada por la dinámica del sistema capitalista mundial, por lo tanto a través de un desplazamiento sin mediaciones, se expande como sentido común político la idea que la resolución de la crisis de la sociedad chilena requería una rápida transformación socialista. Estos análisis, revestidos de legitimidad científica, carecían de una perspectiva en la cual los datos estructurales sobre los límites del desarrollo capitalista se vincularan con un análisis de la dinámica de las clases sociales, del universo ideológico cultural y de la naturaleza del Estado, sumariamente descrito como un Estado burgués, y de los actores políticos sociales. La significación social de estos análisis fue producida por la compatibilidad con un clima ideológico, respecto al cual operaban como sistematizadores más que como focos críticos.

Vinculado a lo anterior está el rol que juegan en la última evolución ideológica de la izquierda los grupos escindidos del reformismo democrata cristiano a finales de la década del 60 y comienzos de los 70. Por un lado, su aporte inicial se expresa en la discusión del Programa de la UP. Pero, por otro lado, estos grupos ceden a la tentación de buscar su legitimidad en la alternativa a los grandes partidos populares. Su potencial innovador es reducido, entonces, a un discurso que expresa las contradicciones de una élite que busca un hueco político en un proceso de movilización de masas. Para hacerlo, sin embargo, debe buscar el referente de su discurso en la práctica de los otros actores políticos, con lo que dicho discurso adquiere un carácter ecléctico en que teoría y práctica política nunca aparecen integrados y en que los problemas ideológico-estratégicos no pueden ser superados.

Todo el desarrollo anterior nos lleva al problema que, en otra parte, hemos denominado tentativamente el vacío teórico-ideológico de la Iz-

quierda.²⁵ La evolución de la crisis del régimen político, de la cual hemos mostrado los elementos de polarización, de desinstitucionalización y de degradación de la legitimidad, es como hemos dicho, el resultado de la lucha política y de clases que se constituye en torno a la realización del programa de la UP. Es evidente que en eso tuvo un papel importante el modo como la UP concibió, semantizó y realizó ese proyecto.

Plantear la hipótesis de un vacío teórico-ideológico implica señalar la distancia entre el carácter objetivo posible y las formas históricas que asume el proceso social, sea como práctica o como discurso y apuntar al requerimiento de una práctica y un discurso que fueran compatibles con ese carácter objetivo posible.

Si se analizan las polémicas internas de la UP durante el período veremos que ellas reflejan en algunos puntos centrales, una problemática del "modelo revolucionario", lo que hace que el modo de pensar y los contenidos del pensamiento estén a menudo desplazados directamente desde los textos clásicos o desde otras referencias históricas a la realidad concreta. No se trata sólo del estilo, aunque también en ese terreno llama la atención la presencia de una terminología militar que en el caso de Lenin o Mao correspondía a las exigencias de la situación política, sino de la transposición mecánica de la concepción (papel de la violencia, papel de la fuerza o de la ofensiva, necesidad de ruptura del Estado burgués) y también de algunos diseños de acción, como el papel que se le asigna al poder popular de base en la generación de condiciones revolucionarias. Se trata de un fenómeno de "fetichización" de la teoría. Es evidente que los elementos derivados de algunas concepciones clásicas de la revolución, estaban mezclados y combinados con elementos que surgían de la tradición política chilena o de la experiencia práctica de sus dirigentes. Esa combinación aleatoria no constituía una teoría, lo que hace que el problema de las alianzas y de los compromisos o del carácter del Gobierno haya sido analizado en una perspectiva muy insuficiente.

El análisis de estos fenómenos, llámense vacío teórico-ideológico, fetichización de la teoría, o simplemente insuficiencias, no puede reducirse al análisis de las contradicciones internas dentro de la UP. Se trata de problemas de orden diferente. Sin embargo, es evidente que existe relación entre ellos.

Estas contradicciones o diferencias de línea, como hemos señalado, tenían una base histórica, expresada antes de la constitución de la UP en la oposición de la línea del Frente de Trabajadores del PS y de la línea de apertura al centro radical del PC.

²⁵ La idea de un "vacío teórico ideológico" ha sido desarrollada en los trabajos de M.A. Garretón, "*Una perspectiva para el análisis...*" art. cit. y de Tomás Moulian "*Vacío teórico ideológico y proyecto nacional popular: las concepciones de la Izquierda chilena durante el periodo 1970-1973*" (en Informe de Investigación, junio 1976... *op. cit.*). Dentro de esta misma problemática, el concepto "fetichización de la teoría" ha sido usado por Cox en su trabajo citado.

Cuando a partir de la llamada Asamblea del Pueblo de Concepción a mediados de 1972, empezó a configurarse de un modo orgánico la oposición de líneas, la acción práctica de la UP tomó cada vez más un carácter errático, en el cual se manifestaba la precariedad de los arreglos políticos internos. La crisis de Octubre 1972 operó como factor de homogenización, dando la impresión que las exigencias del momento y las urgencias de la acción práctica hubiesen apagado el creciente ardor de las disputas de línea; sin embargo, pasado el momento de la tensión, el debate renació a propósito de la participación de los militares en el Gobierno para no decaer. Lo que parece interesante es la simetría entre el ritmo en que esas contradicciones se manifiestan y el ritmo de la crisis en desarrollo. Es la percepción del deterioro de las condiciones políticas generales la que hace rebrotar los conflictos internos, creando el espacio político para opciones alternativas de dirección.

Sin embargo, la aceptación por todos los grupos de la necesidad de mantener la unidad del frente y el carácter pragmático de la conducción política de Allende, hace que la pauta de arreglos deriven en un cuadro de atomización y dispersión ideológica. La característica de ese tipo de cuadros es o que no se constituyen alternativas ni siquiera como discursos coherentes, que respondan a los problemas principales necesarios de abordar, o que, existiendo un bloque homogéneo con un discurso sistemático, este último no logra constituirse como dirección política. En este caso, parece haber predominado largamente la primera situación, aunque bastante avanzado el proceso haya cristalizado la otra.

En síntesis, este rápido análisis de la izquierda política revela un doble fenómeno, cuyos componentes están entrelazados aunque no pueden reducirse el uno al otro. Por un lado, la ausencia de una teoría adecuada a las características del proceso, lo que explica el recurso al empirismo o a lo que se cree son "las teorías y leyes universales de la revolución". Por otro lado, la existencia de un proceso de polarización ideológica interna durante el período del Gobierno UP, cuyo resultado es la atomización y dispersión políticas.

Es en este cuadro que puede formularse una breve apreciación sobre la conducción de Allende. Ella presenta un doble aspecto contradictorio, de cierta coherencia y claridad en lo que se refiere a la concepción general del proyecto político y su viabilidad, por un lado, y de pragmatismo para impedir las rupturas del bloque político, por otro. Su acción aparece desgarrada entre estos planos. Históricamente esto tiene sus raíces en el rol que juega en la expresión pública de la alianza comunista socialista. Su racionalidad de acción le acerca al PC, pero tiene legitimidad histórica dentro del PS, aun cuando esto último no se cumpla siempre en los niveles más altos de dirección. Pero ello mismo le impide ejercer acciones decisivas en el dominio interno de ambas organizaciones. Su conducción tiene entonces más el carácter de resultante de un campo de fuerzas que de eje que asegura un liderazgo efectivo.

Es evidente que un análisis de las expresiones y la conducción políticas de la Izquierda es necesariamente limitado cuando no se hacen las referencias a las dinámicas propias de la base social y el movimiento popular con que ellas están relacionadas. Dos fenómenos relativamente contradictorios llaman aquí la atención. Por un lado, los altos grados de conciencia política de esta base social, que vive el período, más allá de los beneficios objetivos recibidos, como un proceso de liberación. Ni las dificultades de funcionamiento de la sociedad, ni los problemas señalados de su expresión político partidaria, minan su adhesión y movilización en torno al Gobierno. Por otro lado, las dificultades de los canales partidarios de dar cuenta de esta experiencia vivida. Tales dificultades se expresan a su vez en dos planos. El primero se refiere a la relativa incapacidad teórica y práctica de proyectar el carácter universalista y de alcance nacional de la experiencia de liberación vivida por estos grandes núcleos populares. El segundo, a la dificultad de entender las dinámicas autónomas de movimiento popular, que implicaban cambios necesarios en una conducción política demasiado ligada a los intereses inmediatos de los sectores populares más tradicionalmente organizados. La radicalización masiva fue interpretada —por unos y otros— mucho más en términos de modelos políticos “correctos” o “desviados”, que en cuanto expresión de intereses y aspiraciones, los que las canales institucionales o políticos no eran capaces de transmitir.

IV

Cualquier análisis de actores políticos del período no puede dejar de detenerse, aunque sólo sea esquemáticamente, en las FFAA. A este respecto cabe señalar que nuestras hipótesis reflejarán la ausencia generalizada de un conocimiento histórico y empírico suficiente.

Entre los factores que hacían posible el “constitucionalismo ideológico” y el sometimiento al poder civil de las FFAA, pueden señalarse: a) el fracaso de los militares como alternativa política cada vez que intentaron serlo, entre 1927 y 1931, o en 1932; b) la capacidad del sistema político para resolver los conflictos y enfrentamientos políticos sin necesidad de recurrir a soluciones extra institucionales; c) la unidad ideológica de la élite política, desde conservadores a comunistas, en la necesidad de preservar al sistema de la intervención militar; d) el enclaustramiento de las FFAA en un mundo militar, lo que hacía difícil la constitución de alternativas políticas o la difusión de un consenso político; e) por parte de la Derecha, el recuerdo del carácter progresista o izquierdizante de las intervenciones militares más significativas.

Sin embargo, existían factores que debilitaban la subordinación de las FFAA al poder civil, algunos de los cuales se manifestaron en 1969, en

una rebelión militar de carácter parcial o localizado, cuyos objetivos explícitos eran de naturaleza gremial. Los que nos parecen más relevantes son los siguientes: a) el hecho de vivir, tanto personal como institucionalmente, en una situación de escasez relativa de recursos, acentuada en los últimos gobiernos, y de status disminuido; b) la dependencia, tanto individual como institucional, del poder político, como que hacía actuar a las FFAA como grupo de presión dentro del sistema de negociación; c) la existencia de una disonancia entre la imagen pública y la imagen institucional: los militares se sentían como una encarnación de la Patria y eran tratados como burocracia estatal por los políticos o incomprendidos por el ciudadano corriente.

Al acceder Allende al Gobierno se modifica la situación militar en cuanto se les otorga a las FFAA mejores remuneraciones y más recursos y se valora públicamente la función militar, tratando de vincular sus cuadros a responsabilidades gubernamentales en empresas fiscales.

Sin embargo, aun sin tomar en cuenta las condiciones políticas concretas en que se desarrolló el Gobierno, los siguientes factores deben considerarse determinantes en la relación de las FFAA con un Gobierno de Izquierda: a) el reclutamiento selectivo socialmente, predominantemente de capas medias y, en ciertos casos, de "hijos de familia", unido a la compatibilidad entre algunos ejes de la socialización militar y la ideología de las capas medias, por ejemplo, la concepción naturalística del orden; b) los vínculos entre los militares y los sectores de latifundistas y empresarios durante su paso por las guarniciones de provincias; c) la influencia norteamericana creciente en las FFAA, especialmente en lo que se refiere a las modernas doctrinas de Seguridad Nacional respecto a la subversión y el "enemigo interno". Este último, nos parece uno de los factores más importantes. La socialización en tales concepciones fortaleció la autoimagen mesiánica de las FFAA y rompió el enclaustramiento en que vivían a nivel nacional durante un largo período. Por otro lado, en la medida que tales concepciones vinculaban el fenómeno subversivo no sólo a problemas de tipo militar sino a factores económicos, políticos, militares y culturales, se preparaba el camino para la implementación de un proyecto político de las FFAA, las que ven en tales concepciones los elementos necesarios para formular tal proyecto. Así, estas concepciones operarán como selector de alternativas cuando, por motivo de la crisis, intervienen en la arena política como fuerza decisiva.²⁶

Todo ello se refleja en un fuerte anticomunismo de las actuales gene-

²⁶ Si bien el despliegue efectivo de estas doctrinas más allá de las FFAA ha tenido lugar a partir de la instauración del gobierno militar, donde aparece en su carácter de ideología de dominación, los datos sobre la asistencia de oficiales chilenos a los centros donde tales enseñanzas se impartían en los EE.UU., son reveladores. Entre 1950 y 1974, se entrenan ahí 4,815 oficiales. (*Military Assistance Facts*, Washington D.C., Dpt. of Defense, 1969 y *Covert Action in Chile*, op. cit.).

raciones de oficiales superiores, formados en el período de la guerra fría, aunque también este anticomunismo se vincula a la formación de tales generaciones en la época de la Ley de Defensa de la Democracia.²⁷

Sin embargo, lo interesante es que la intervención militar no se produjo en octubre de 1970, ni siquiera en octubre de 1972. Nuestra hipótesis es que las condiciones que la hacían posible estaban en relación, por un lado, con la evidencia de una crisis de funcionamiento, evidencia que debía estar lo más generalizada posible, aun entre los que seguían apoyando al Gobierno y, por otro lado, con la culminación del ciclo de polarización, desinstitucionalización y pérdida de legitimidad, es decir, con el desarrollo de la crisis del régimen político. Desde el punto de vista operativo, tales condiciones dicen relación con la unificación del Alto Mando, de modo de tener a favor la legitimidad jerárquica, y con la recuperación del máximo de fuerzas para el líder insurreccional, para lo cual éste debía, en el caso del Ejército, nuclear al "pratismo".

A estas hipótesis hay que agregar la principal. Durante todo el período, las FFAA se orientan por una lógica: preservar sus intereses institucionales primordiales, evitando ser desmembrados y divididos. La situación de crisis política los hace darse cuenta en un primer momento de su significación política decisiva como árbitros y, con el deterioro de la situación, la posibilidad de ser alternativa de poder si actuaban unificados. La fuerte unidad conseguida para derrocar a Allende demuestra, supuestos los factores ideológicos ya señalados, la importancia de las lealtades e intereses corporativos en las situaciones de conflicto. Desde este punto de vista, lo que las FFAA podían esperar del Gobierno de la Unidad Popular era sólo un rol subordinado en la resolución de la crisis política, en tanto que el bloque opositor les asignaba un rol mesiánico, cuyo correlato era la percepción de un proyecto autónomo de poder.

Así, una vez asegurada la unidad de las FFAA en torno a una alternativa propia de poder, no habrá mucho margen para la articulación del nuevo sistema de dominación. En efecto, la polarización de la lucha política, el anulamiento de uno de sus polos, la desaparición del centrismo como actor significativo y la consolidación ideológica del modelo autoritario en el liderazgo del bloque opositor y de sus sectores radicalizados—además de los factores estructurales de la crisis— permiten entender la naturaleza que adquiere el nuevo proyecto político desde el momento mismo del derrocamiento de Allende y la ruptura del sistema político vigente.

²⁷ La Ley de Defensa de la Democracia fue aprobada en 1948. Entre sus principales disposiciones contenía la ilegalización del PC. Esa ley se aprueba en el marco político de la guerra fría y de la gran ofensiva iniciada por el PC después de su triunfo en las elecciones municipales de 1947. Esa ley estuvo vigente hasta 1957. Sin embargo, desde 1952, con el acceso de Ibáñez al Gobierno, el PC actúa en la semi legalidad.